ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 045

SUMARIO

07 DE MAYO DE 2008

CAPÍTULOS	**TEMA**
I	CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.
II	INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
III	LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
IV	HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.
V	CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE MAYORÍA Y MINORÍA, PRESENTADOS POR LA MESA CONSTITUYENTE 8 DE JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, PARA EL SEGUNDO DEBATE (DEFINTIVO) DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES, REFERENTES A: PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
VI	CLAUSURA DE LA SESIÓN.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 045

ÍNDICE:

CAPÍTULOS	TEMA	PÁGINAS
I	Constatación del quórum. ----------	1
II	Instalación dc la sesión. ----------	4
III	Lectura del Orden del Día. ----------	4
	Intervenciones de los asambleístas:	4
	Villalva Marcelo ----------	5
	Panchana Rolando ----------	6
IV	Himno Nacional de la República del Ecuador.-	6
V	Conocimiento de los Informes de Mayoría y Minoría, presentados por la Mesa Constituyente N° 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, para segundo debate (definitivo) de los textos constitucionales, referentes a: Principios de la Administración dc Justicia. --	6
	Intervenciones de los asambleístas:	
	Andino Mauro ----------	10, 99
	Vega Fernando ----------	17
	Esteves Rafael ----------	20, 38, 98
	Montaño Mae ----------	25
	Masaquiza Vicente ----------	28
	Taiano Vicente ----------	31, 101
	Roldós León ----------	35
	Ayala Catalina ----------	39
	Amores Betty ----------	40
	Gómez Héctor ----------	44
	Columba Franklin ----------	47
	Acosta Diana ----------	50
	Reyes Cristina ----------	54
	Romo Maria Paula ----------	56
	Chacón Sergio ----------	58
	Godoy Gina ----------	61
	Rohón César ----------	65

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 045

Kronfle María Cristina ---------- 67
Hurtado Lenin ---------- 69
Ortiz Alfredo ---------- 73
Guamangate Gilberto ---------- 76
Hernández Luis ---------- 79
Gracia César ---------- 81
Mendoza Manuel ---------- 85
Cordero Fernando ---------- 88
De la Torre Rosa Elena ---------- 89

El señor Presidente suspende la sesión de la Asamblea Constituyente ---------- 93

El señor Presidente reinstala la sesión dc la Asamblea Constituyente ---------- 93

Intervenciones de los asambleístas:

Lara Antonio ---------- 93
Rodríguez César ---------- 96

VI Clausura de la sesión ---------- 108

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Acta 045

En el Centro Cívico "Ciudad Alfaro", ubicado en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, a las quince horas treinta y dos minutos del día siete de mayo del año dos mil ocho, se instala la sesión de la Asamblea Constituyente, dirigida por su Presidente, asambleísta Alberto Acosta Espinoza.----------

En la Secretaría actúa el doctor Francisco Vergara Ortiz, Secretario de la Asamblea Constituyente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sírvase constatar si tenemos quórum, por favor. Señoras y señores asambleístas, les rogaría tomar asiento para constatar si tenemos quórum, para poder empezar la sesión inmediatamente. ¿Podemos comenzar a tomar lista, por favor? ¿Tenemos quórum? Le pediría que tomemos lista. ----------

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenas tardes, señor Presidente. En este momento. Abril Jaime, presente. Acosta Diana, presente. Aguirre Aguirre Gorki, ausente. Alarcón Fernando, ausente. Alcívar Jaime Eduardo, está la suplente de Alcívar Jaime Eduardo, presente. Alcívar Félix, ausente. Alvarado Rosana, presente. Amores Betty, presente. Andino Mauro, presente. Arboleda Amanda, presente. Atarihuana Geovanni, ausente. Ávila Abel, ausente. Ayala Catalina, presente. Azín Annabclla, ausente. Benavides Tcresa, presente. Bohórquez Ximena, ausente. Borja Diego, presente. Borja Galo, presentc. Buenaño Aminta, presente. Burbano Fernando, ausente. Cabezas Irina, presente. Caicedo Laly, presente. Calle María Augusta, ausente. Calvas Jorge Eduardo, presente. Cando Dionisio, presente. Carrión María José, presente. Chacón Sergio Enrique, presente. Chávez Hólger, ausente. Chuji

Mónica, ausente. Cisneros Francisco, presente. Coka Denise, presente. Columba Franklin, presente. Cordero Fernando, presente. Correa Rommel, presente. Darquea Gustavo, ausente. De la Cruz Pedro, presente. De la Torre Rosa Elena, ausente. De Luca María José, presente. Espín Sofía, ausente. Estacio Balerio, presente. Esteves Rafael, presente. Fadul Jorge, presente. Falconi Pamela, ausente. Franco Nécker. Está el suplente de Julio Chactong, presente. Franco Nécker, ausente. Godoy Gina, presente. Gómez Héctor, presente. Gómez María Elena, ausente. Gracia César, ausente. Grefa César, ausente. Guamangate Gilberto, presente. Guillem Humberto, presente. Gutiérrez Gilmar, ausente. Hernández Virgilio, presente. Hernández Luis, presente. Hidrovo Tatiana, presente. Hurtado Jaime Lenin, ausente. Játiva Mario, presente. Kronfle María Cristina, ausente. Lara Antonio, presente. Lara Galo, presente. López Nelson, presente. Lucio-Paredes Pablo, presente. Lupera Fausto, presente. Machuca Linda, ausente. Maigua Elvia, ausente. Maruri Eduardo, presente. Masaquiza Vicente, presente. Mendoza Manuel, ausente. Mendoza Tito Nilton, presente. Molina María, ausente. Montaño Mae, presente. Morales Pedro, presente. Morocho Margarita, presente. Moser Ana, presente. Naranjo Xiomara, Naranjo Xiomara, ausente. Narváez Edison, ausente. Nicola Gerardo, ausente. Ocles María Alexandra, presente. Orrala Oswaldo, presente. Ortiz Alfredo, ausente. Palacios María del Rosario, presente. Panchana Rolando, presente. Panta Mercedes, presente. Paredes Sara, presente. Pavón Andrés, ausente. Pazmiño Patricio, ausente. Pazmiño Dioselina, presente. Peñafiel Marisol, ausente. Picoita José, ausente. Pilamunga Carlos, presente. Pinto Germánico, ausente. Ponce Roberto, presente. Puente Franklin, presente. Queirolo Rosanna, presente. Quezada Gabriela, presente. Regalado Rory, ausente. Reyes Cristina, presente. Rivas Guido, presente. Rivera Romel, presente. Rivera José Gabriel, presente. Roca Hilda, presente. Rodríguez César, presente.

Rodríguez Iván, ausente. Rohón César, presente. Roldós León, presente. Roldós Martha, presente. Romo María Paula, presente. Romo Rómulo, presente. Rosado Gissel, presente. Ruiz Jaime, ausente. Salazar Francisco, presente. Salazar Luis Fernando, ausente. Sánchez Eduardo, ausente. Sarango Jorge, presente. Segovia María Isabel, presente. Sotomayor Fanny, presente. Taiano Vicente, presente. Terán Héctor, presente. Tola Beatriz, ausente. Touma Guillermo, presente. Vargas Wladimir, ausente. Vega Fernando, presente. Vela María Soledad, presente. Velasco Francisco, presente. Villalva Marcelo, presente. Viteri Leonardo, ausente. Wray Norman, ausente. Zambrano José Ricardo, presente, ausente. José Ricardo. Zambrano Eduardo Alfonso, presente. Acosta Alberto, presente. Aguirre Gorki, presente. Alarcón Fernando, ausente. Alcívar Félix, ausente. Atarihuana Geovanni, presente. Ávila Abel, presente. Azín Annabella, ausente. Bohórquez Ximena, presente. Burbano Fernando, presente. Calle María Augusta, ausente. Chávez Hólger, ausente. Chuji Mónica, ausente. Darquea Gustavo, presente. De la Torre Rosa Elena, presente. Espín Sofía, ausente. Franco Nécker, presente. Gómez María Elena, está la suplente de Gómez María Elena, presente. Gracia César, ausente. Grefa César, presente. Gutiérrez Gilmar, ausente. Hurtado Jaime Lenin, ausente. Kronfle María Cristina, ausente. Machuca Linda, presente. Maigua Maruja, ausente. Mendoza Manuel, presente. Molina María, ausente. Naranjo Xiomara, ausente. Narváez Édison, ausente. Nicola Gerardo, presente. Ortiz Alfredo, ausente. Pavón Andrés, ausente. Pazmiño Patricio, ausente. Peñafiel Marisol, ausente. Picoita José, presente. Pinto Germánico, presente. Regalado Rory, ausente. Rodríguez Iván, ausente. Ruiz Jaime, ausente. Salazar Fernando, presente. Sánchez Eduardo, ausente. Tola Beatriz, ausente. Vargas Wladimir, ausente. Viteri

Leonardo, ausente. Wray Norman, presente. Zambrano José Ricardo, ausente. Ciento tres asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. ----------

II

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Muy buenas tardes compañeras y compañeros. Instalo la sesión. Señor Secretario, sírvase leer el Orden del día. ----------

III

EL SEÑOR SECRETARIO. "Por disposición del señor Albcrto Acosta, Presidente de la Asamblea Constituyente y de conformidad con el artículo 7, numeral 6 y artículo 25 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión 45 del Pleno a realizarse el miércoles 7 de mayo de 2008, a las 15H00 en la Sala de Sesiones del Centro Cívico "Ciudad Alfaro", ubicado en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la República del Ecuador; 2. Conocimiento de los Informes de Mayoría y Minoría, presentados por la Mesa Constituyente, número 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, para el Segundo Debate (Definitivo) de los textos constitucionales, refcrentes a: Principios de la Administración dc Justicia; y, 3. Proyecto dc Mandato que permite la inversión de los recursos patrimoniales provenientes de las utilidades del Fondo de Solidaridad en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones". Hasta ahí el texto.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Sírvase leer....

Asambleísta Villalva. No alcanzo a ver. Asambleísta Villalva, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA VILLALVA MARCELO. Gracias, señor Presidente. Bucnas tardes, señores y señoras asambleístas. Señor Presidente: En esta mañana hice llegar por la Secretaría, un oficio en donde, señor Presidente, donde concierne el tercer punto, donde se va a tratar el Mandato de la inversión de recursos patrimoniales provenientes de las utilidades del Fondo de Solidaridad en el sector eléctrico y de telecomunicaciones. Señor Presidente, solicito que se postergue este tratamiento, dondc cstoy solicitando, señor Presidente, los requerimientos sobre los datos financieros del Fondo de Solidaridad. ¿Cuál es el monto de su patrimonio?, ¿cuál es su paquete accionario en las empresas distribuidoras, generadoras, de transmisión de energía eléctrica y en las empresas telefónicas?, ¿a qué monto ascienden sus utilidades, montos de inversión y gasto corriente?, ¿cómo distribuye sus utilidades actualmente? ¿Cuáles son los montos que se han entregado a EMELEC, hoy CATEG? Un informe de las empresas distribuidoras que indique su función, su estado de pérdidas y ganancias, para saber si el Fondo de Solidaridad no está invirtiendo sus recursos en empresas que en toda su existencia ha causado solo pérdidas y siempre ha solicitado que cl Estado siga alimentando su ineficiencia. Asi también, señor Presidente, una ampliación de este Mandato, en el artículo dos, para que beneficie a todo el país...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Mire, compañero...----------

EL ASAMBLEÍSTA VILLALVA MARCELO. ...en el tema del sector eléctrico que no ha tenido inversión en el área de distribución y no solo a una ciudad especial, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Ese es un tema del punto mismo, señor Asambleísta. Señor Asambleísta Panchana, por favor. Pero entiendo que esa información se va a presentar el día de hoy. ----------

EL ASAMBLEÍSTA PANCHANA ROLANDO. Sí, señor Presidente, buenas tardes. Precisamente la información que requiere el Asambleísta va a ser presentada en el fundamento del Mandato, y lo haremos Alexandra Ocles y yo, y estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud, esta tarde. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Señor Secretario, sírvase leer el primer punto del Orden del Día. ----------

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. "1. Himno Nacional de la República del Ecuador". ----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto, señor Secretario. ----------

V

EL SEÑOR SECRETARIO. "2. Conocimiento de los informes de Mayoría y Minoría, presentados por la Mesa Constituyente número 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, para el Segundo Debate (Definitivo) de los textos constitucionales, referentes a: Principios de la Administración de Justicia". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sírvase leer el informe de mayoría, señor Secretario y el articulado correspondiente. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Informe de Mayoría. Objeto: Principios de la Administración de Justicia. I. Análisis de las observaciones. Se recibieron 29 observaciones que fueron sistematizadas y discutidas en la Mesa, cuya matriz adjuntamos al presente informe. Algunas observaciones tuvieron que ver con aspectos de forma y redacción y han sido acogidas en la medida en que mejoraban el texto del articulado. Otras no han podido ser incorporadas por entrar en contradicción con el espíritu general de lo aprobado en la Mesa 8. Finalmente algunos aportes versaban sobre aspectos que serán considerados en artículos posteriores. La mayoría de observaciones incorporadas se ha concentrado en tres aspectos: (1) La definición del Estado, (2) La unidad jurisdiccional, y (3) La gratuidad. (1) Sobre la definición del Estado, la Mesa optó por recoger las observaciones que lo caracterizan como Estado Social y Democrático de Derecho. Lo social se refiere a la obligación del Estado de propiciar las condiciones materiales para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. La dimensión democrática hace referencia al ejercicio de soberanía popular como fuente de legitimación de todo poder público. El Estado de derecho implica que el poder público está limitado por la expresión de la voluntad general a través de las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico. (2) La Mesa ratifica el criterio expresado en el informe para primer debate, en el sentido de que la unidad jurisdiccional expresa que otros poderes o funciones del Estado no pueden encargarse de la administración de justicia, ya que es competencia de los órganos expresamente creados y facultados para ejercer la potestad de administrar justicia. Se eliminan por tanto jurisdicciones especiales como las de policía y militar. La presencia de

otros órganos que también tendrán la función de administrar justicia en materias especiales no son excepciones de la unidad jurisdiccional, son jurisdicciones con su propia razón de ser, con sus funciones específicas y su propia naturaleza. (3) En la gratuidad se resolvió acoger las observaciones referentes a regular expresamente las excepciones a este principio, para garantizar el acceso a la justicia en materias sensibles. Algunas observaciones no se refieren a los principios de la administración de justicia, sino a temas o instituciones como la Corte Constitucional, Defensa Pública, justicia indígena, justicia de paz, derechos de emigrantes y principios que no discutió la Mesa en el primer debate. Estas observaciones y aportes los discutiremos en la parte pertinente del desarrollo de los temas encomendados a la Mesa 8". Luego está un texto que fue enviado con el informe. Para información de los señores asambleístas, el 2 de mayo se incorporó un nuevo texto en el cual se hacía algunas correcciones, con el Memorando 129-2008 MIAC. Procedo a leer el texto completo. III. Texto constitucional propuesto. De los Principios de la Administración de Justicia. Artículo innumerado. Naturaleza, titularidad y ejercicio. La Justicia es el valor fundamental del Estado social y democrático de derecho y uno de los presupuestos éticos que garantiza la convivencia pacífica y armónica. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida por los órganos de la Función Jurisdiccional y por los demás órganos y funciones establecidos en esta Constitución y en la ley. Artículo innumerado. Independencia. Los órganos de la Función Jurisdiccional, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones son independientes. Cualquier violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la ley. Artículo innumerado. Autonomía. La Función Jurisdiccional goza de autonomía administrativa, económica y financiera. Artículo innumerado. Unidad Jurisdiccional. Se establece la unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad

de las restantes funciones y organismos del Estado, ni de las entidades de régimen seccional o autónomo podrá desempeñar funciones de administración de justicia, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos o autoridades. Artículo innumerado. Gratuidad. La administración de justicia es gratuita en todas sus materias e instancias, salvo los procesos en materia tributaria, mercantil y civil con excepción de aquellos relacionados a los temas de familia. Artículo innumerado. Publicidad. Los juicios, en todas sus etapas, y las resoluciones serán públicos, salvo los casos y regulaciones expresamente señalados en la ley. Artículo innumerado. Naturaleza del sistema procesal. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las leyes procesales consagrarán los principios de oralidad, simplificación, uniformidad, inmediación, eficacia, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. El retardo o negligencia en la administración de justicia, imputable al juez, magistrado u otros funcionarios, serán sancionados de conformidad con la ley. Artículo innumerado. Oralidad. La sustanciación de los procesos en las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción, inmediación y dispositivo. Artículo innumerado. Criterios de designación. Para el ingreso a la Función Jurisdiccional se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana. Artículo innumerado. Carrera profesional. Se reconoce y garantiza la carrera profesional en la Función Jurisdiccional, cuyas regulaciones se determinarán en la ley. La profesionalización con base en la formación continua, así como la evaluación periódica de los funcionarios son condiciones indispensables para la promoción y permanencia en la

carrera profesional". Hasta ahí el informe y el articulado, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Asambleísta Andino, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, ciudadanía: En nombre de la Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción, permítanme que en primer término agradezca a todos los señores y señoras asambleístas por el aporte que hicieron en el primer debate, para nosotros haber recogido las sugerencias, las ponencias e insertarlos en los diez primeros artículos que precisamente en esta tarde procederemos a tratarlos en segundo y definitivo debate. Mi ponencia, señor Presidente, complemcnta el informe de mayoría presentado y que se ha dado lectura en esta tarde. En lo principal, debo señalar que se hicieron mejoras en cuatro aspectos centrales: El primero, en lo que se relaciona a la unidad jurisdiccional. Este tema fue el más polémico, en razón de la existencia de otras jurisdicciones reguladas independientemente de lo que hemos llegado a denominar la Función Jurisdiccional. Tan polémico, que el consenso sobre este punto ya no es unánime. Segundo. La concepción incompleta del Estado y su relación con la justicia, fue también el blanco de las críticas dc varios compañeros asambleístas. Aquí se impuso el criterio de que el concepto de Estado de derecho es insuficiente, y que era necesario complementarlo con su dimensión social y democrática. Tercero. La gratuidad del acceso a la justicia y su alcance, fue el otro gran tema de interés. Aunque se compartía el avance constitucional de consagrar como principio de gratuidad, se advirtió que era insuficiente y hasta peligroso ceder a la legislación la potestad de establecer excepciones y Cuarto. El artículo referente al

principio de publicidad, fue significativamente modificado, con el fin de permitir no solo la publicidad en la tramitación de los procesos o de los juicios, sino también su transmisión por los medios de comunicación, en los casos y de conformidad a las disposiciones legales. Por lo demás, se hicieron observaciones al sistema oral y al principio dispositivo. Observaciones que me permitiré comentar al final de esta ponencia. También se propuso la inclusión de tres nuevos principios, referentes a la democratización de la justicia, a la interpretación intercultural y a la corresponsabilidad social. Estos principios contenían elementos importantes que merecen una discusión más profunda y, por ello, la Mesa decidió tratarlos en un debate posterior y no incluirlos para este debate. Como podrán darse cuenta, señoras y señores asambleístas, se hicieron correcciones menores en los artículos referentes a la naturaleza del sistema procesal y a la carrera judicial. En el primer caso, se añadió en la parte pertinente a la responsabilidad por el retardo o negligencia, las palabras "u otros funcionarios". Extendiendo la responsabilidad no solo a los jueces y magistrados, sino también a los otros funcionarios relacionados con la administración de justicia. En el segundo caso, se cambió la denominación de "carrera judicial", por el de "carrera profesional", con el fin de ampliar el concepto de carrera, a los otros órganos de la Función Jurisdiccional, como el Ministerio Fiscal y la Defensoría Pública. Finalmente, entre las modificaciones menores, se sistematizó mejor el orden del articulado. Los artículos que norman los principios de gratuidad y publicidad, fueron reubicados después de los demás principios generales, dejando para el final los aspectos procesales y lo referente a la carrera profesional. Señoras y señores asambleístas, si ustedes me permiten, presentaré con detalles las razones que justificaron las cuatro modificaciones centrales introducidas en el articulado. Primero, con referencia al tema más discutido, es necesario preguntarnos: ¿Qué entendemos por unidad

jurisdiccional?, ¿qué implicaciones tiene con la relación de otras jurisdicciones constitucionalmente reconocidas? Para responder a estas cuestiones, planteamos dos dimensiones de análisis: Una visión histórica, que trata sobre la razón original que justificaba el principio de unidad jurisdiccional, y una visión más funcional que orgánica, que permite resolver la aparente contradicción entre varias jurisdicciones de distinta naturaleza, y el principio de unidad jurisdiccional. Históricamente, el principio de unidad y exclusividad jurisdiccional, surge como el intento de limitar el poder absoluto de las monarquías. La doctrina de la separación de poderes, pretendía una especialización de funciones en órganos completamente independientes. El Ejecutivo no podía legislar, el Legislativo no debía tener potestades ejecutivas, y ninguno de ellos podía administrar justicia. Esta era la mejor garantía para la libertad. Pero también se dirigía este principio, contra las jurisdicciones especiales de entes corporativos que no garantizaban ni tampoco daban la transparencia ni la realización del principio de igualdad jurídica. En suma, el principio de unidad jurisdiccional, pretendía garantizar la libertad, la igualdad jurídica y la imparcialidad en la administración de justicia, tan venida a menos hoy en estos días. En ese momento histórico, no se planteaba las consecuencias doctrinarias y prácticas que implicaba el surgimiento de jurisdicciones extraordinarias, como la justicia constitucional, y más tarde, la justicia electoral. Por un lado, ellas no implicaban una mezcla de funciones, pero tampoco presuponían una aceptación irrestricta del principio de unidad jurisdiccional. ¿Qué hacer? La respuesta de la mayoría de Constituciones fue la afirmación del principio de unidad jurisdiccional limitada a la justicia ordinaria, pero reconociendo que el desarrollo constitucional permite la existencia de excepciones justificables que relativizan el principio de la unidad jurisdiccional. El ejemplo más claro es la justicia constitucional, que como garante de la Constitución,

puede ejercer control normativo incluso sobre las decisiones judiciales. La justicia electoral, como se ha discutido y aprobado en este Pleno, implica un avance en el sentido que separa la organización electoral de la justicia en ese ámbito. Ello garantiza decisiones más imparciales y transparentes, pues en definitiva, lo importante es que los órganos que administran o tienen potestades ejecutivas, no tengan al mismo tiempo potestades jurisdiccionales. Por tanto, la existencia de otras funciones con potestades jurisdiccionales, bajo las condiciones expuestas, no solo que siguen garantizando las libertades públicas, la igualdad jurídica y la imparcialidad, sino que la potencian y perfeccionan completamente. Desde un punto de vista funcional, llegamos a la misma conclusión. La perspectiva únicamente orgánica de la unidad jurisdiccional como el enclaustramiento de todos los órganos jurisdiccionales en la justicia ordinaria, ya no es suficiente para explicar la diferenciación y especialización funcional de nuevas jurisdicciones. Esta visión funcional más compleja es la que recoge el proyecto innovador de esta Asamblea. Pues no pretende reproducir la división tradicional de poderes, sino que se crean nuevas funciones con objetivos y fines específicos. Según ello, será la Corte Constitucional la primera Función del Estado, y a ello se suman la Función Electoral con un órgano especializado en administrar justicia en temas electorales, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué queda de la concepción clásica de la unidad jurisdiccional? Un aspecto muy importante. Ningún poder del Estado puede concentrar más de una función, y no deben existir jurisdicciones especiales que no garanticen un tratamiento igualitario, sin privilegios o detrimentos. Consecuentes con estas reflexiones, la nueva redacción reconoce el valor relativo de la unidad jurisdiccional, y abre la posibilidad de excepciones expresamente reconocidas y establecidas en la misma Constitución. El segundo cambio importante que introdujo la Mesa, se refiere a la caracterización del Estado y su

relación con la justicia. Este tema fue menos polémico, pero no por eso menos importante. ¿Cuál es el Estado que queremos? Aunque no hemos respondido por completo a esta cuestión, de las observaciones presentadas, se deduce fácilmente que el carácter social y democrático son requisitos mínimos indispensables de nuestro modelo de desarrollo del Estado. A pesar de que en artículo sometido a primer debate no se pretendía caracterizar por completo al Estado, se argumentó con justa razón, que la simple mención de Estado de derecho implicaba un retroceso de siglos, con respecto al desarrollo constitucional. Por ello se decidió incluir los adjetivos "social y democrático", para calificar de manera adecuada al Estado. Históricamente, el Estado de derecho era el concepto de combate de la burguesía en auge, que pretendía el reconocimiento de los derechos de propiedad y de empresa y de ciertas libertades frente al Estado. La mejor manera de afirmar estas pretensiones se traducían en la separación de poderes y el sometimiento del poder público a la ley. La misma historia se encargaría de demostrar que un concepto tan formal y limitado, no solo permitió que dictaduras justificaran sus fechorías con leyes criminales, sino que también hacía vacía la garantía de las libertades, si no existían las bases materiales que hagan posible el ejercicio pleno de esos derechos. La lección que se extrajo de esa experiencia pavorosa, fue complementar el concepto formal del Estado de derecho con un contenido cualitativo importante, el respeto a la dignidad humana y su complemento con la dimensión social, que obliga al Estado a crear las condiciones materiales para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer plenamente sus derechos. Cronológicamente, el elemento democrático del Estado de derecho fue incluido más temprano, que la dimensión social. El principio de la soberanía popular hacía referencia a la fuente de legitimación de todo poder público, e implicaba que ese poder estaba limitado por la expresión de la voluntad

general a través de las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico. De este modo, se recogen en la nueva redacción los principios del constitucionalismo moderno, el Estado de derecho en su dimensión formal y material, la dimensión social y, por último, la característica de democrático. El tercer cambio importante aborda, aborda la gratuidad del acceso a la justicia y sus alcances. Las observaciones elogiaron el hecho de que se establezca como principio general la gratuidad, y no como en la Constitución de mil novecientos noventa y ocho, en la que la gratuidad era la excepción. Pero se criticó el hecho de que se dejara a la ley el establecimiento de las excepciones en las cuales la administración de justicia no es gratuita, esto porque existía el riesgo de que la ley podría ir más allá de las intenciones de la norma constitucional, y establezca excepciones que desnaturalicen la gratuidad. La solución era evidente: determinar exprcsamente los casos de excepción a la gratuidad. Se optó, entonces, como criterio para establecer las excepciones considerar aquellas materias que menos incidencia social tienen y que poseen un carácter más patrimonial. Así se estableció como excepciones los procesos en materia tributaria, mercantil y civil con excepción de aquellos relacionados a los temas de familia, que por sobre todas las cosas debemos precautelar. Con esta forma constitucional, evitamos que sea la legislación la que ponga los límites a la gratuidad. La cuarta y última gran mejora del nuevo articulado sometido esta tarde a debate, se refiere a los alcances de la publicidad de los procesos o de los juicios. La redacción original proclamaba el principio de publicidad, pero imponía límites claros a la tramitación de las diligencias procesales por los medios de comunicación. La nueva redacción propone un conccpto más amplio de publicidad como mecanismo de transparencia y control social, y no descarta la transmisión de las diligencias procesales, siempre y cuando se lo haga en los casos y bajo las condiciones determinadas o establecidas en

nuestro ordenamiento legal. El mensaje es claro queremos más transparencia en la administración de justicia. Para terminar permítanme, compañeros....----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. ...hacer algunas reflexiones generales sobre los principios procesales, la oralidad y el principio dispositivo. Temas que también merecieron algunas sugerencias de los compañeros. Algunas observaciones ponían en duda la calidad de principios procesales a los principios mencionados en los artículos sobre la naturaleza del sistema procesal y sobre la oralidad; y cuestionan la pureza del sistema y oral y la conveniencia del sistema acusatorio frente al inquisitivo. Sobre el primer aspecto, tenemos un problema básico de definición: ¿Qué entendemos por principio procesal y qué entendemos por característica del sistema procesal? En concordancia con la doctrina y la literatura sobre la materia, la Mesa fue del criterio que estos artículos recogen verdaderamente principios que deben inspirar el sistema procesal y no son simples características. La oralidad... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo ha terminado, señor Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. ...es un tema muy importante. Gracias, señor Presidente, gracias, a los compañeros de la Mesa Ocho por haberme permitido ser ponente, y por haber tenido esa unificación de criterios. A todos ustedes, muchísimas gracias, en especial al Presidente y a la Vicepresidenta de la Mesa. Muy gentil. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Vega, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. Señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas: La letra mata, pero el espíritu da vida. Quisiera hablar en esta tarde del espíritu que debe informar esta Constitución, desde la perspectiva de la justicia, y por habernos propuesto en la Mesa un articulado nuevo en cierto sentido. Cuando decimos que la justicia es el valor fundamental del Estado social y democrático de derecho y uno de los presupuestos éticos que garantiza la convivencia pacífica y la armonía en la comunidad, estamos hablando precisamente de esta revolución ética, de esta revolución de valores que necesita nuestra sociedad ecuatoriana. La justicia, como función jurisdiccional o judicial, ha sido uno de los pilares esenciales de la trilogía del Estado republicano surgido de la Revolución Francesa, los tres poderes. Sin embargo, en la historia del Ecuador, la administración de justicia ha dejado mucho que desear, ya que ha sido en general una justicia de clase, al servicio de una clase, de la clase dominante. No hemos logrado construir un auténtico y verdadero Estado de derecho y derechos. Refranes populares como "la justicia es para los de poncho", revela esa profunda sabiduría popular que dice cómo siente el pueblo de la administración de justicia. Hemos logrado producir como once mil leyes principales y hasta setenta mil leyes entre decretos y leyes secundarias. El Ecuador debe ser uno de los países con más leyes del mundo, un país tremendamente legalista, en donde la ley se convierte en una maraña y en una cortina de humo para la impunidad, para que nada funcione. Parecería que todo en el Ecuador ha sido hecho para que el aparato de la justicia sirva para que no haya justicia. En los últimos veinticinco, treinta años de esta débil democracia, la Función Judicial se ha deteriorado aún más, bajo el secuestro de los jueces y

tribunales a manos de grupos políticos y económicos que han hecho de la Función Judicial el núcleo y el instrumento de su poder antidemocrático. Los ha convertido en botín politico y en puerta de escape para toda impunidad; en cortina de humo para los corruptos, en castigo y persecución para los enemigos políticos, y en sacrificio y pena para los pobres, nuestras cárceles están llenas de pobres. La ciudadanía, y lo hemos podido constatar en estos meses de Asamblea y en lo que tiene que ver con las mesas itinerantes, la ciudadanía vaga sedienta de justicia, sin tener quien sacie su sed. Hasta nuestra Mesa Ocho, continúan llegando las innumerables denuncias, que evidencian la falta de justicia y la corrupción reinante, donde debía reinar precisamente la pulcritud y la prontitud. Cada vez que el ciudadano se encuentra con la justicia, se topa con la corrupción, el tortuguismo, la ineficiencia. El pueblo ha perdido la confianza en la administración de justicia y por ello recurre a veces la justicia por propia mano, y otros recurren al cielo. Hay un Dios en el cielo que hará justicia, dicen. La ciudadanía, repito, ha perdido la esperanza y la confianza en la justicia ecuatoriana, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Se dice a nivel internacional, para invocar el arbitraje de tribunales extranjeros, que la justicia ecuatoriana no es confiable. Ante este diagnóstico, la Mesa Ocho, y la Asamblea tiene el enorme reto de refundar el país sobre los pilares fundamentales de la justicia. La revolución ciudadana como revolución ética ha de poner como fundamento principal la justicia. La Justicia es un valor ético, que atraviesa toda la Constitución ecuatoriana, y nos invita abrir nuestras mentes hacia horizontes que van más allá del mero ámbito de la justicia legal. Estamos construyendo, y eso espera el pueblo, una Constitución para un Ecuador justo, una justicia que no se circunscribe a los tribunales de justicia. Una justicia que informa, penetra y restaura toda la vida ciudadana y comunitaria. La Justicia como virtud, como hábito y

costumbre de juzgar las relaciones interpersonales y comunitarias, con criterio recto, y dar a cada uno según sus derechos, y restablecer esos derechos cuando han sido vulnerados por otro miembro de la comunidad o por los conflictos interpersonales y comunitarias. La Justicia restablece la dignidad humana. El ser humano, cuando se hace justicia, vuelve a recuperar su dignidad, su esperanza. La persona a la que no se le hace justicia, el pueblo al que no se le hace justicia, vive humillado, amargado, lleno de violencia y frustración. Si los derechos son progresivos, como estamos afirmando en la Constitución, también la justicia es progresiva, se abre a nuevos aspectos, a los derechos de tercera, cuarta generación; a los derechos de los pueblos, a los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, hoy los jueces asombrados van a tener que empezar a juzgar sobre delitos y derechos de la naturaleza, por ejemplo. En un Estado social de derecho la justicia tiene que ver con la contribución y la distribución de la riqueza que es de todos y, a través de todos los articulados sobre modelo económico, desarrollo, etcétera, estamos queriendo establecer un país más justo. Si la Constitución no es más justa, si no construimos en el Ecuador socialmente, económicamente más justo, lo tribunales de justicia nunca podrán hacer lo que la Constitución no pudo. En un Estado democrático de derecho la justicia requiere que llegue a todos, sea de todos y para todos, de forma transparente, pronta, oportuna. Por eso queremos, esta Asamblea y también la Mesa Ocho, trabajará para que la justicia sea transparente y que la ciudadanía tenga un control ciudadano, una veeduría permanente sobre la elección de los jueces y su actuar. En un Estado que se va a definir como plurinacional, pluricultural, una vez más la justicia ha de ser también transcultural, hemos de aceptar el pluralismo jurídico, no como una excepción, sino haciendo justicia histórica reconocer los derechos de los pueblos. En un Estado donde hay grupos vulnerables y personas que no son iguales, en teoría, todos

somos iguales ante la ley, pero en la práctica no hay esa igualdad. Hay desigualdad entre los litigantes, hay personas que tienen menos derechos que otros, menos acceso que otros a los derechos. En este caso, la justicia tiene que dejar de ser ciega, levantarse un poquito la venda, para apegados a la ley, hacer justicia y construir la equidad. A veces, quienes se apegan... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, señor Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. ...a la letra de la ley, no logran construir verdaderamente, no logran hacer justicia. Termino, señor Presidente, en ese minuto. En este cambio necesitamos jueces con mentes lúcidas para abrirse a esas nuevas demandas de la justicia, con corazones que se indignen ante la injusticia y que amen apasionadamente la equidad. Que tengan manos limpias y probas para administrar la justicia de forma ágil y oportuna. Solo así la justicia será una realidad presente. En un Estado laico no puede ser posible que los ciudadanos tengan que acudir al cielo para esperar justicia y poner velitas a San Cayetano, abogado de los imposibles, para que alguien les haga justicia. La justicia tiene que llegar a este país, la justicia en el Estado tiene que ser para este siglo, para este mundo, para esta vida. Que brille la justicia, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Ojalá así sea, compañero Asambleísta. Asambleísta Esteves, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Gracias, señor Presidente. Bien, llegó la hora de que empecemos a hablar de la justicia, de eso que todos hablan pero que nadie cree. Porque en este país en la administración de justicia, señor Presidente, compañeros asambleistas, no se cree. Y no se

cree porque hay sobradas razones para pensar así. Pongo un ejemplo: Un juicio de daño moral que presenta una niña de cuatro años, está en una Sala de una Corte Superior de Justicia más de dos años, solamente para decidir si un menor de edad paga tasa judicial. Esto es terrible. Sin embargo, no se falla eso que no es una resolución sobre lo principal, sino que es una especie de requisito de admisibilidad de la demanda. ¿Cómo puede suceder esto en el Ecuador, con niños? Ese es el trato cuando la Constitución, Presidente, en el artículo cuarenta y siete dice: todo lo que se trate de menores tiene un trato preferente, prioritario y especializado. Aquí no se cree en la administración de justicia, y por eso prolifera la administración de justicia por la mano propia, con lo cual no estoy de acuerdo. ¿Cómo puede ser posible, señor Presidente, que se conozca que este Consejo de la Judicatura, en un concurso anterior, se les pusieron calificaciones a quien no obtuvo ninguna, serie de corruptelas, porque así hay que decirlo y, sin embargo nos que damos callados y hasta este momento no hemos tenido la valentía de ponerle los cascabeles al gato? ¿Qué clase de Consejo de la Judicatura? En la Mesa Ocho estuvieron presentes y se acusaron entre ellos mismos, y tomamos una actitud, a mí me perdonan mis compañeros, demasiado timorata, pusilánime. Debimos ser enérgicos, con la suficiente energía como para sancionar y denunciar públicamente lo que está ocurriendo. En esos concursos de merecimientos yo no creo. Puede ser posible que realizado un concurso haya un margen discrecional para que se nombre al que está con más puntaje, al que se le sigue en puntaje, al que está más abajo. Si se hace un concurso, el que gana es el que tiene más puntos, de lo contrario ese concurso es una farsa. Vamos a lo principal. Por favor, requiero mis diez minutos, y los cinco minutos restantes cuando usted lo considere oportuno. Tenemos estos artículos, ustedes observarán, mi firma no está en el informe ni tampoco en la aprobación de cada uno de ellos.

Aquí no se está descubriendo el agua tibia, como se dice. Esto ya estaba en la Constitución anterior, vea usted: Unidad jurisdiccional, transitoria vigésima sexta de la Constitución del veintiocho, año noventa y ocho, perdón. Gratuidad, ya estaba en la Constitución anterior. Oralidad, ya estaba en la Constitución del noventa y ocho. Diez años han pasado y no se ha hecho realidad ni la oralidad ni tampoco la unidad jurisdiccional ni la gratuidad de administración de justicia. Comienzo yo, por el artículo cuarto a fin de que, por favor, se exhiba en la pantalla y el pueblo lea. "La administración de justicia es gratuita en todas sus materias e instancias, salvo los procesos en materia tributaria, en materia mercantil, en materia civil, con excepción de aquellos relacionados a los temas de familia". ¿Cómo puedo yo estar de acuerdo con esto? La administración de justicia, Presidente, compañeros asambleistas, ¿es gratuita? o ¿no es gratuita? El derecho a acceder a la justicia es innato a la persona, es parte de los derechos humanos y es deber del Estado garantizarle a sus ciudadanos que puedan acceder a la administración de justicia, sin tasas judiciales o impuestos, como se dice en otras Constituciones. Vamos al Derecho Comparado. Constitución venezolana, absolutamente gratuita la administración de justicia y el Estado tiene que destinar del Presupuesto General un porcentaje a la administración de justicia. No puede ponérsele precio a la justicia, porque indirectamente exigir el pago de tasa judicial es una manera de ponerle precio a la justicia. Muchos jueces se valen de esto, compléteme la tasa judicial, y si no me la completa no le admito la demanda al tramite, y vamos a la apelación y se duerme en la noche de los tiempos la demanda. La Constitución de Sociedad Patriótica; doscientos doce, dice: "Gratuidad de la administración de justicia. En todos los casos la administración de justicia será gratuita", en todos los casos. Constitución del CONESUP, dice que: "En los procesos constitucionales, penales, laborales, de alimentos, de la niñez y la

adolescencia la administración será gratuita, en los demás casos no es gratuita". ¿Cómo pueden haber hecho esto los señores del CONESUP? ¿Cuántos recursos el Estado gastó para que se haga este tipo de normas discriminatorias? El que tiene plata tiene acceso a la administración de justicia y el que no tiene dinero no puede acceder a la justicia. No podemos ser discriminatorios. Si ésta va a ser una Constitución revolucionaria como se dice, debemos comenzar por aquí, Administración de justicia total y absolutamente gratuita en todas las áreas, y el Estado tiene la obligación de garantizarle al ciudadano ese acceso a la administración de justicia. Vamos al Derecho Comparado a nivel internacional. En Argentina, gratuidad absoluta a la administración de justicia. Artículo ciento dieciséis, perdón, en Bolivia. En Chile, en Colombia, artículo ochenta y ocho, artículo doscientos veinte y nueve; en Honduras, artículo trescientos tres; en Panamá, esto en Panamá, qué bonito: "La administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida. La gestión y actuación en todo proceso se surtirá en papel simple; -y aquí viene lo bueno- y no estará sujeto a impuesto alguno". En la Constitución panameña. No creo en normas como ésta y por eso no firmé. Creo en la administración de justicia gratuita. Y si ésta en realidad es una Constitución revolucionaria, terminemos con las tasas judiciales, dejemos de humillarle al pueblo, dejemos de discriminarle. El que tiene plata presenta la demanda, el que no tiene plata no la presenta. No, esa es una obligación del Estado y esto existía, vea usted, en la Constitución del noventa y ocho. Han pasado diez años y esto no se ha concretado. Si les contara la cantidad de juicios en que por este tema de la tasa judicial se han quedado anclados y no ha podido haber acceso a la administración de justicia y ha tenido que recurrirse a cortes internacionales para que demanden al Estado, y que el Estado pague de la plata de todos los ecuatorianos, y que no se ejerza el derecho de repetición. Son innumerables y se me van

los diez minutos, cien minutos, hasta la medianoche me quedaría hablando sobre eso. Entonces no estoy de acuerdo en que se haga excepciones a la gratuidad de justicia. La justicia es gratuita o no es gratuita. Vamos a la unidad jurisdiccional. Vea esto, la unidad jurisdiccional, Transitoria vigésima sexta, que pasarán todos los juzgados que no pertenecían a la Función Judicial y que pertenecían al Ejecutivo, que pasen a la Función Judicial, y se daba un término para que el Consejo de la Judicatura preparara las leyes, las mande al Congreso, las apruebe y se haga realidad. ¿Qué ocurrió?, que el Consejo de la Judicatura...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Se da cuenta, no se alcanza. ¿Cómo puedo en diez minutos analizar nueve artículos? La patria necesita un debate más amplio, de lo contrario no estamos informando debidamente al pueblo, tengo que hacer maravillas para poder explicar nueve artículos en diez minutos. No se puede. Unidad jurisdiccional. Hasta la presente, señor Presidente, pasaron diez años y no se hizo realidad. Y habia otra norma, la Transitoria vigésima cuarta, que decía que si el Congreso no hace lo que le corresponde, el Ejecutivo manda las normas y se le da el trámite de leyes económicas-urgentes. Y el Ejecutivo tampoco cumplió, no cumplió el Legislativo y no cumplió el Ejecutivo. Por eso es que se necesita, señor Presidente, la inconstitucionalidad por omisión, como una norma sancionadora del que viola la Constitución, del que transgrede la Constitución. Ahora vamos al sistema oral, pero ya no me queda tiempo. Y esto de la carrera profesional ¿de dónde me la sacaron? Es carrera judicial. Las personas que han trabajado en la administración de justicia y que

trabajan...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Concluyó su tiempo, doctor.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Se da cuenta, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su consentimiento.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le agradezco por su intervención y por su aporte, doctor. Asambleísta Montaño, por favor.----------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO MAE. Muchas gracias, señor Presidente. Colegas asambleístas: Quiero iniciar agradeciendo de todo corazón, muy sinceramente, al Presidente de la Mesa, al padre Fernando Vega, quien ha hecho creo votos de paciencia y de tolerancia al interior de la Mesa, haciendo honor a su función de curita; a nuestra colega Vicepresidenta, Gina Godoy, quien ha llevado adelante los debates técnicos legales en la Mesa. Decía que quería empezar agradeciendo, porque de verdad hemos tenido al interior de la Mesa un trabajo amplio, suficientemente democrático, y esto hay que decirlo, en donde hemos hecho suficientes esfuerzos inclusive para romper paradigmas. Porque siempre se ha dicho que los temas de leyes y los temas de justicia estaban preferentemente orientados y reservados para los abogados y las abogadas. Y nos hemos encontrado en la Mesa, abogados experimentados, abogados y abogadas jóvenes, sociólogos y hasta una ingeniera comercial. Y entonces al principio pensábamos que iba a ser imposible trabajar en esa Mesa. Sin embargo, hasta los resultados del primer debate, nosotros entendimos, que precisamente la riqueza del trabajo en un equipo interdisciplinario radica en la posibilidad de tener distintos enfoques, distintas formas y visiones que finalmente terminan enriqueciendo los resultados y los contenidos. Nuestro trajinar por

algunas ciudades y provincias del país, en las mesas itinerantes, nos hizo reconocer una vez más que uno de los sectores en donde más se siente la injusticia social, la discriminación y la marginación, es precisamente en el sector justicia, y que una de las áreas en donde más metió la mano la política, contaminando y poniendo a su servicio precisamente a un órgano importante para sostener la democracia y para conseguir la justicia social, ha sido el sector justicia. Entonces nos propusimos en la Mesa a hacer los esfuerzos necesarios para ser un ejemplo de consensos y de acuerdos. Y efectivamente llegamos al primer debate de este Pleno, con consensos y con resultados unánimes. Sin embargo, llegamos a este segundo debate, con disensos. ¿Qué es lo que pasó en el camino? No es que las aportaciones del primer debate, de los colegas asambleístas hayan desmejorado o mejorado los contenidos. Yo creo que han pasado situaciones importantes que tienen que ver con la metodología de trabajo de la Asamblea. La primera cosa, que no hemos definido hasta ahora conceptos importantes como este del modelo de Estado que queremos; que no se definieron desde el principio las debidas competencias en el trabajo de las Mesas, y entonces nos encontramos con que al regresar a esta segunda fase del debate, hemos encontrado desechos, los que para mi criterio, sin ser abogada, considero que fueron los mejores resultados de la primera etapa. Y es que cuando entendimos que los problemas de la justicia tienen que ver con el desorden en el que están los distintos órganos del sector justicia, con la desarticulación, con la descoordinación, con la sobreposición a veces de funciones, con las luchas internas entre los distintos órganos, y con la falta de un enfoque sistémico del sector, era necesario hacer un esfuerzo fundamental para que la nueva Constitución definiera, como una Constitución que quiere un Estado moderno, la mayor transparencia, la mayor articulación, la mayor coordinación y también mecanismos de mayor eficiencia de estos

órganos. Es que el concepto de la Función Jurisdiccional no es un invento de la Mesa. Fue la discusión profunda de recoger estas aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Entendiendo entonces que este enfoque sistémico permitiría una unidad jurisdiccional. No tampoco por capricho, sino porque creemos que el enfoque sistémico es en este momento la mejor forma de evitar corrupción y de evitar manipulación. Sin embargo, decía que la falta de separación de las competencias de la Mesa no permitieron que este concepto valioso pudiera concretarse de manera especifica y total, y nos encontramos con que no sé si por protagonismo o no sé si por no ceder pequeñas parcelas, la Mesa Dos declaró su propia jurisdicción electoral. Entiendo que la Mesa Tres preparará una jurisdicción constitucional, y entiendo también que la Mesa Uno definirá las garantías del debido proceso, y a lo mejor definirá que el Ejecutivo también tenga como ahora, jurisdicción para aplicar estos derechos. Significa entonces que hemos perdido, en mi criterio, los mejores avances en este primer trabajo de la Mesa número Uno. Y llegamos a un primer artículo que determina, en un juego de palabras, y digo de palabras, no porque no me gusten, son lindas, en que la justicia es el valor fundamental del Estado social y democrático de derecho. Pero sucede que aquí no hemos discutido los contenidos de "social y democrático". Y lo que para mí puede ser una cosa, para el Presidente del Plenario podria ser otra cosa y para el Presidente de la Mesa también. Pero lo que es más grave, es que estamos definiendo que el pueblo va a delegar en la Función Jurisdiccional este ejercicio, este derecho. Sin embargo, aumentamos "por los demás órganos y funciones que establece esta Constitución y esta ley". Por tanto, es lógico pensar que la unidad jurisdiccional no existe. Como igual, se vuelve a declarar en el artículo cuatro, que existe una unidad jurisdiccional pero que existirán otros órganos que aplicarán también, que tendrán su propia jurisdicción y que se definirán no solamente en la Constitución sino en

la ley. Inaplicable, inaplicable, completamente inaplicable. Hay conceptos que no pueden tener excepciones. La unanimidad y el concepto de unidad son conceptos que no tienen excepciones. No podemos decir que un artículo se aprobó por unanimidad, a excepción de treinta asambleístas. Eso no es. O sea, es unánime o no es unánime. La unidad no tiene excepciones, o hay unidad o no hay unidad. Por tanto, llegamos aquí con un informe de minoría, que dice "no aceptaremos el artículo Uno", primero, porque hay un juego de palabras no definidas, y segundo, porque determina que otros órganos tendrán jurisdicción. Por tanto la unidad jurisdiccional no existe, ni en el artículo uno y menos en el artículo cuatro. Hay una bonita, una cita bien interesante que se hace y que lo hemos presentado en nuestro informe, que hace Kart Lorwenstein, y dice lo siguiente: "Una Constitución podrá ser jurídicamente válida, pero si la dinámica del proceso político no se adapta a sus normas, la Constitución carece de realidad existencial". Por tanto, en homenaje a la realidad, a esa realidad existencial, el artículo uno y el artículo dos se vuelven realmente inaplicables. Cabría entonces: o suprimir, modificar el artículo uno, suprimir el artículo cuatro, porque no tiene razón de ser, o devolverle a la Mesa Ocho, la potestad de decidir, cuando se trate de justicia, los mecanismos sobre los cuales se tiene que resolver esta unidad jurisdiccional....----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le quedan... Ah, listo, gracias, Asambleísta. Asambleísta Masaquiza, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA MASAQUIZA VICENTE. (Intervención en kichwa). Buenas tardes, señor Presidente y señores, compañeros asambleístas. De los principios de la administración de justicia. La justicia es un elemento fundamental de convivencia de nuestra sociedad, necesita del

apuntalamiento de sus bases a fin de que se marche a la consecución de nuestros derechos. El objetivo de los compañeros que conformamos la Mesa número Ocho de Justicia y la Lucha contra la Corrupción, es dar a una sociedad la garantía y el marco estructural de una verdadera administración de justicia, que parte desde la necesidad de determinación de independencia, hasta concluir en la carrera profesional. Como principios, que de una u otra manera fortalece lo que ha establecido en Constituciones anteriores hasta ésta. Para este segundo debate, coherentemente se ha procedido a los análisis de las observaciones, las recomendaciones emitidas por nuestros compañeros asambleístas. En este punto, cabe recordar la crisis que agobia a la administración de justicia, siendo responsables de que ese hecho, el sistema en el cual inclusive nos encontramos involucrados, cuando de una manera irresponsable hemos perdido los valores fundamentales y que se ha inducido a la corrupción como un mecanismo para alcanzar nuestros intereses. Mientras nuestros hijos no sean encaminados a un rescate, que constituye el respeto en que una norma de convivencia colectiva, no alcancemos a la restauración de nuestros tan anhelados objetivos. Aun cuando el texto constitucional elaborado abarque lo ideal, la esperanza de nuestra colectividad ecuatoriana está puesta en esta Asamblea, que necesariamente tiene que traducir las necesidades de nuestros mandantes que es el pueblo soberano. Pero éste, como se dijo anteriormente, tiene que asumir su responsabilidad de cambio y su cosmología colonial, en donde si bien ha existido el discurso de la igualdad, nunca habla de un bien común. Señor Presidente y señores asambleístas, cuántas ocasiones quisiéramos, quienes somos ecuatorianos, entre ellos: mestizos, blancos, montubios, cholos, indígenas y afroecuatorianos hemos estado en la puerta de un juzgado o de una autoridad pública, en donde nos han dicho, no tenemos tiempo, regresa mañana o en ocho días, etcétera. Pero esos ocho días se

transforma en meses, en años, inclusive solo esperamos el sueño de los justos. O también cuántas veces los poderes del capital, políticos o influenciados, mientras nosotros esperamos sentados, porque parados nos vamos a cansar, hasta obtener unos objetivos, resoluciones sentencias, en días y sin estar sentados. Ésta es la realidad de la administración de justicia, en que en ningún momento no nos han respetado, sino más bien nos han tratado en una forma déspota e irreverente. El pueblo ecuatoriano, con honrosas excepciones, han tenido jueces, magistrados y autoridades justas, que se encuentran como funcionarios públicos, por solo el hecho de ser parte de una prebenda partidista, oportunista, que simple y llanamente aun cuando presuntamente han sido nombrados con concurso, como ya dije, se encuentra bajo el imperio de la corrupción, favorecimiento de una cúpula. Señor Presidente, hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano debe cambiar la actitud y convertirse en que guie su propio destino y no ser un simple observador y conformista. Un pueblo sin voz es un pueblo hundido en la miseria, encaminado, porque quienes pretenden tener la razón sin conocer una realidad sociológica, peor antropológica diversa y a la misma vez unitaria. Señor Presidente, gracias con todo esto, con las Mesas Itinerantes que hemos estado en las demás provincias y con los demás compañeros, esto ha hecho fortalecer para una nueva administración de justicia. Ojalá esto dure años, no solo para diez, quince años, sino para años que vengan, compañeros. De esta manera, les pido un favor más a todos los compañeros y compañeras, que pongamos fe, el compromiso, lo bueno que tenemos en nuestra Mesa Ocho, con todos los conocimientos de los grandes expertos juristas, gracias. Y con jóvenes que estamos aprendiendo de esta revolución ciudadana, hemos estado lanzando no solo como indigenistas, sino para todo el pueblo ecuatoriano. Y de la misma manera, señor Presidente, pido dos minutos para hablar en mi idioma, porque mi pueblo espera,

porque mi pueblo está en las televisiones, en todos los rincones de nuestra patria. (Intervención en kichwa). Yupaichani, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Yupaichani, compañero. Asambleísta Taiano, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros asambleístas: Vamos a aprobar en esta tarde, los primeros artículos de nuestra Constitución, en relación a la administración de justicia. El pueblo ecuatoriano tiene sed y tiene hambre de justicia. Eso lo conocemos todos. Por cualquier rincón del país por el que viajemos encontramos quejas de la administración de justicia. Y efectivamente, la Mesa número Ocho, en el trabajo de los primeros cuatro meses ha venido discutiendo prácticamente todo el capítulo, que luego será llevado a la Constitución, en lo que tiene relación a la Función Jurisdiccional, a su órgano, a su competencia, y comenzamos con los primeros artículos relacionados a los principios de la administración de justicia. Y como decía nuestra compañera Mae Montaño, en un ambiente democrático hemos discutido estos principios y logramos hacer un primer informe para primer debate, unánime, así como lo hicimos el día de hoy con los temas relacionados al Ministerio Público. Hemos podido ponernos de acuerdo y elaborar un articulado por unanimidad. Porque como dije al inicio, los ecuatorianos, todos tenemos sed y hambre de justicia. Y en los principios de la justicia, el primer principio que aprobamos, es el principio de independencia de la administración de justicia. Porque es un hecho cierto que todos los ecuatorianos lo conocemos, que la justicia en nuestro país, lamentablemente, por lo menos en las últimas tres décadas ha venido siendo manipulada políticamente; la justicia en nuestro país ha venido

obedeciendo consignas políticas de los entes nominadores o designadotes. No se ha podido cortar ese cordón umbilical entre el administrador de justicia y quien lo ha designado. Nombres y apellidos se le ha puesto a la justicia en los últimos treinta años. Por eso, señor Presidente, me preocupa inmensamente las noticias que aparecieron el día de ayer en casi todos los diarios de circulación nacional, en el sentido de que esta Asamblea Constituyente con los plenos poderes que tiene, aprobaría supuestamente este Mandato cuyo borrador ha circulado en esta Asamblea. Mandato en el cual, al estilo de las peores dictaduras que ha habido en la historia republicana de este país, sin dar ninguna explicación, se destituye supuestamente, se desconoce a diecisiete magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo voy a defender a nadie, es público que yo me opuse a la inconstitucional designación de estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero tienen un solo mérito, desde mi punto de vista, fueron valientes en someterse a un concurso público de oposición y merecimientos; inconstitucional, sí, pero que solucionó un problema que lamentablemente se había ocasionado en el país. Y mire, ¿por qué mi preocupación? Porque este borrador, que no sé si tenga validez o no, pero que es defendido por un asambleísta de su partido, señor Presidente, dice lo siguiente: Solamente, si usted me permite, voy a leer un acápite. "En forma provisional y mientras se compone íntegramente la nueva Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la estructura institucional y los preceptos establecidos en la nueva Constitución Política del Estado, a través de un sistema de concurso público, de méritos, conocimiento, oposición y contraloría social, se encarga como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los siguientes ciudadanos", que yo entiendo a los siguientes compañeros, porque no hay otra forma de que lo hagan, a dedo, sin ningún tipo de terna, de conocimiento, de concurso de oposición, a dedo. Eso no se puede

permitir, señor Presidente. Y eso no significa que la justicia en el Ecuador funcione bien. La justicia en el Ecuador funciona mal, la justicia en el Ecuador no funciona, señor Presidente. No hay acceso a la justicia en el Ecuador, la gente pobre no tiene acceso a la justicia, el pueblo no tiene acceso a la justicia. Por eso nosotros hemos trabajado arduamente en constitucionalizar en un artículo de la Constitución, la Defensoría Pública como una de las obligaciones del Estado ecuatoriano, para que la mujer pobre que tiene que ir a reclamar alimentos a un juzgado de Menores, lo haga con el patrocinio del Estado, y lo mismo el que va a reclamar una pensión de inquilinato, el hombre que tiene que recurrir a un juzgado de Trabajo, a un juzgado Penal, a un juzgado Civil. Yo sí creo, en lo personal, que debe de haber una tasa judicial, para que ayude a financiar la administración de justicia en el Ecuador. Pero esa tasa judicial no la pueden pagar los pobres en el Ecuador, por eso hay que liderar la justicia penal, la justicia civil, en el área de menores, la justicia de inquilinato, la justicia en el área de trabajo. Que paguen la tasa judicial la gente que tiene plata, señor Presidente. Hay juicios millonarios, de muchísima cuantía, en el área civil, en el área mercantil, en el área tributaria, que bien pueden pagar una tasa para recibir servicio de la administración de justicia. Pero esa tasa no la puede pagar el pueblo, y así lo estamos estableciendo en el principio de gratuidad de la justicia, solo con esa excepción. Le decía, señor Presidente, compañeros asambleístas, que no tenemos porqué defender a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero decía también que tienen el mérito de haber sido electos por un concurso de merecimientos y oposición. Pero, fíjese usted, que ya no depende solamente de los conocimientos o del mérito, porque el país debe acordarse los escándalos que ha tenido esa Corte Suprema de Justicia, en el área penal, y que ha sido objeto de autodepuración. A la Mesa número Ocho, en los últimos días, nos acaba de llegar una

denuncia vergonzosa, en la cual los conjueces de una sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, arrogándose funciones, llamando a un conjuez de otra Sala, condenan a un banco del Estado, al pago de cinco millones de dólares, por una supuesta indemnización por daños morales, arrogándose funciones, señor Presidente. Indiscutiblemente que esos jueces no solamente que deben ser destituidos, sino que deben estar en la cárcel por el delito de prevaricato que han cometido. Esas cosas tiene que sanearla la justicia del Ecuador. Yo, personalmente le he pedido al Ministro Fiscal, que dicte una instrucción fiscal en este caso. Pero eso no amerita, señor Presidente, que esta Asamblea que nos ha puesto a trabajar durante varios meses, trabajando en el área constitucional de la justicia, pretenda ahora tomarse por la fuerza la administración de justicia del país, a través de un Mandato. Nos harían quedar muy mal, señor Presidente, si esta Asamblea, si usted como Presidente de esta Asamblea, permite que esto se haga. Hemos trabajado también dentro de los principios de la administración de justicia, en algo que es muy importante, en ratificar la carrera de los funcionarios judiciales, porque ahí hay, señor Presidente, sí hay en la Corte, en las cortes del país, gente honesta que viene trabajando muchos años. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Y no solamente que defendemos constitucionalmente la carrera judicial, sino que también estamos poniendo la evaluación y la capacitación de los jueces, como principio de la administración de justicia. Gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Debo indicarle a la sala y a usted, en particular, que ese Mandato que usted acaba de

mencionar, no ha sido analizado oficialmente por la Comisión Directiva, y que personalmente lo conocí a través de los medios de comunicación, como la mayoría de asambleístas. Y además, mi posición personal, si le interesa a usted y al resto de asambleístas, es que la Asamblea no tenga que intervenir para nada en la justicia, y nunca más un Congreso Nacional intervenga en la justicia. Asambleista Roldós, por favor.---------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Gracias. Creo que la Mesa ha hecho el trabajo muy interesante, y yo quiero felicitar y agradecer por el trabajo. He estado dos ocasiones en la Mesa, y es verdad que estamos todavía en los principios. Pero quisiera insistir en dos puntos: Uno ya acogido, que justamente, acogido parcialmente, que es justamente, aquello de las excepciones de la gratuidad. Porque el proyecto inicialmente presentado acá, hablaba, "salvo las excepciones de ley". Y la pregunta era ¿cuáles son las excepciones de ley? Podrían ser muchísimas. La diferencia que yo tengo con el texto de la gratuidad, es que yo creo que no puede un Mandato Constitucional, quedar solo en la..., perdón, una norma constitucional, quedar solo en una referencia, como aparece "salvo los procesos en materia tributaria, mercantil y civil, con excepción de aquellos relacionados a los temas de familia". Yo propondría que se señale expresamente: "La ley, -ahí sí la ley- establecerá en materia tributaria, mercantil y civil los derechos o costas, a excepción del derecho de familia que corresponde recaudar". Y ¿por qué digo la ley? Porque donde está el abuso, es dejarlo suelto al Consejo de la Judicatura, donde está el abuso, es pasar de la Constitución al Consejo de la Judicatura. Ahí está para mí, el abuso. Me pueden decir, es que tiene que ser realmente gratis, absolutamente gratis, y yo respeto profundamente el pensamiento de todos los colegas y cómo no de Rafael Esteves, mi amigo de tantos años. Pero yo le quiero contar algo, yo pongo nombre y apellido. Hoy día hay un litigio del

Republique National Bank de Florida, del que es abogado el doctor César Coronel, por una inscripción en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, del Banco del Pichincha. Hay juicios de ida, juicios de venida y, ¿eso tiene que pagarlos la Función Judicial, ecuatorianos, cuando dos entidades financieras están litigando millones de dólares? ¿No les parece que es injusto con los sectores sociales que aquello se pague? La ley debe establecer las excepciones, y las excepciones tienen que ser vinculadas con materia, y ya estamos quedando solamente en tres materias: tributaria, mercantil y civil. Y la ley tiene que ser establecida en función de cuantías y de condiciones. Esto eso, tiene que haber los parámetros para que el hombre de clase medias para abajo, ni en esa materia tenga que pagar costas o tenga que pagar tasas judiciales, ni en esas materias. Pero los que están en el gran litigio, que paguen, señor Presidente, que paguen los litigios. Porque además de eso, déjeme decirle, hoy día paga, pero pagan a quienes actúan en el proceso. Había un viejo cuento de un comisario de Policía, cuando yo era estudiante, decía: "El sueldo, mil doscientos sucres; -estamos hablando de dieciocho sucres el dólar- Honestamente, cuatro mil a cinco mil sucres; deshonesto, lo que quieran". La pregunta era: ¿Cómo honesto, cuatro mil y cinco mil? No, honesto es cuando de acuerdo con mi conciencia quien tiene la razón. Entonces a ése le acepto que me pague el traslado, a ése le acepto que me pague los peritos, a ése le acepto que me pague lo de acá y más allá. Eso pasa hoy día. A mí no me vengan a decir, con el cuento que cuando hay millones de dólares en juicios, no hay costas -entre comillas- "manejadas", manejadas. No digo en el caso particular, éste singular; no, ninguno, me refiero a personas, pero en muchos casos hay dinero de por medio. Entonces el pedido que le hago a la Mesa, es que no deje suelto "salvo los procesos en materia tributaria, mercantil y civil". Que establezca que la ley debe específicamente, de ahí sí le pone usted, base social, le pone base

económica, a aquello de la justicia, en los capítulos que, se crean gratuitos. Derecho y familia: cero. Derecho laboral: cero. Usted sabe que en los tiempos del feliz Tribunal Constitucional, antes de que le meta mano Gutiérrez y también el que nació con Gutiérrez, se dieron circunstancias en que manejaban causas tributarias, causas tributarias, como amparos constitucionales, señor Presidente. Cuando hay millones de dólares, cuando se quieren burlar de la justicia, no puede ser que además sea gratuita la justicia, para esta condición, clase, sujetos que intervienen en litigios judiciales. Por eso, a hacer justicia, tenerla gratuita para la clase media y para los de bajos ingresos; sí, se garantiza justamente con una justicia que tenga su financiamiento adecuado, en base de los que más pagan. Yo le quiero decir que esto lo tienen casi todos los países, en el Ecuador hay tasas, hay tasas absurdas que se las cobran al sector público. Por ejemplo, el sector público debe estar exento de tasas judiciales, si defiende el interés colectivo pues. Pero esto tiene que estar en la ley, en la ley tiene que estar, está exento el sector público. Aquí, al sector público, a veces, le dicen pague las tasas. Está la norma de la exención, pero son los abusos que se proceden. Miren, en Estados Unidos cuando se inicia un proceso, si no le interesa al Estado, en Estados Unidos ¿qué hace?, le avisan, las costas de este proceso corren por cuenta de ustedes, aquí no le interesa al Estado este litigio. No lleguemos a este nivel de complejidad, que sería demasiado grave la complejidad, pero sí a una ley que establezca claramente las tasas, las costas en materia judicial. El otro tema que a mi me preocupa y que yo no lo siento claro, aunque se me dice lo vamos a clarificar más adelante, es esta diferencia entre lo que es lo administrativo, la administración pública y lo judicial. Porque también en lo administrativo se usa la palabra "jurisdiccional", y hay acciones de carácter jurisdiccional administrativo, que las consecuencias son muy parecidas a lo judicial. Concretamente, las

acciones coactivas. Las acciones coactivas, señor Presidente, dan lugar a embargos, dan lugar a arraigos, dan lugar a todo, son administrativas. Y el principio que debemos mantener en la Constitución, que ya estuvo en la anterior, es que todo lo que se resuelva a nivel administrativo, en algunos casos con caución, eso sí, tiene que, es posible recurrir a la Función Judicial. Esto es, en materia de justicia nada debe quedar por encima de jueces de derecho. La administración no está por encima de los jueces de derecho. Tiene que estar bajo los jueces de derecho, esa ha sido una constante en la Constitución. Se ofrece que estará en un texto siguiente, yo habría preferido que esté en unidad jurisdiccional. Gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Punto de conocimiento, doctor Esteves.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Sí, voy a hablar en estricto derecho. Una cosa, señor Presidente, señores asambleístas, es la tasa judicial, que es una especie de impuesto, como llama otra Constitución, que se paga para que le admitan al trámite la demanda, y otra cosa diferente son las costas procesales. Las costas procesales son las que se fijan al final del proceso por el juez, y corresponden entre ellas, al honorario del abogado que patrocinó al vencedor en esta litis. Segundo, a los valores de los intérpretes, a los supuestos derechos de amanuenses, existe un reglamento de costas, obsoleto, que todavía está en sucres. Entonces, y respecto a las tasas judiciales hay un tope, antes era el uno por ciento de la cuantía, aquí puede demandar el banco más grande del mundo contra cualquier otra compañía, y saben ¿cuál es el máximo que tienen que pagar de tasa? Son diez salarios básicos unificados, ya no es como antes. Una cosa es la tasa judicial y otra

cosas es las costas procesales...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, doctor.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. ... que se determinan por el juez, cuando hay un litigio por temeridad y mala fe. Y si esto es tan malo, el dar una gratuidad a toda la justicia, ¿por qué en la República bolivariana de Venezuela consta en el artículo veintiséis? ¿Es tan malo en Venezuela?, ¿es tan malo en el Ecuador?, ¿tan bueno en Venezuela? No creo...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, doctor, la información ha sido útil. Punto de interrupción. Gracias, gracias. Asambleísta Ayala, por favor.----------

LA ASAMBLEÍSTA AYALA CATALINA. Muy gentil. Creo valiosos los comentarios del asambleísta Roldós, en el tema de la gratuidad. Sí sería importante quizá para nosotros los de la Mesa estudiar, si nos pudiera pasar por escrito para poder estudiar y que quede perfecto el texto, para que el día de mañana no haya problemas en este tema de la gratuidad. También creo correcto en que se cobre para los grandes juicios, si en realidad lo que tenemos es que aquellos que tienen dinero ayuden a solventar el sistema y ayudar a aquellos que no, y en eso está la solidaridad, efectivamente en ayudar los que más tienen que ayuden a los que menos tienen hasta alcanzar una igualdad. Discrepo con el concepto de que la justicia es el valor fundamental del Estado, puesto que en realidad el valor fundamental del Estado es el bien común o el buen vivir, como ahora lo queremos llamar. En realidad, la justicia es un instrumento para lograr y garantizar la convivencia pacífica y armónica de los pueblos. Quizá habría que cambiar la redacción.

Concuerdo con mis compañeros, en el momento en que redactamos el informe de minoría, que no debemos destruir la unidad jurisdiccional que tanto ha aclamado el pueblo ecuatoriano. El día de mañana cualquiera puede decir y poner en la Constitución, que otro órgano más o función del Estado va a administrar justicia, y tendremos muchísimos administradores de justicia y no solo uno, como en realidad debería ser. Escuché el pluralismo jurídico. Yo creo que la justicia es una sola y eso es lo que debemos respetar. Hemos tenido problemas en el Ecuador, pero ha sido por la falta de seguridad jurídica y porque ha habido injerencia política en la administración de justicia, y eso es precisamente lo que debemos erradicar. Pero eso no solamente se logra poniendo los artículos bonitos en la Constitución y blindándola, sino garantizándolo realmente en el momento en que se escogen a los magistrados. Por lo demás, me sumo a las felicitaciones de la Mesa, creo que consensuando, trabajando y llegando a puntos medios, podemos tener una Constitución que no sea una Constitución simplemente para un Gobierno, sino una Constitución que dure y perdure por mucho tiempo, y que no tengamos una nueva Asamblea Constituyente dentro de diez años, porque va a ser una Constitución que sea consensuada. Gracias.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Amores, por favor.----------

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Señor Presidente y compañeros asambleístas: Soy una de las personas que envió observaciones a la Mesa, en particular sobre estos dos principios fundamentales: el de la unidad jurisdiccional y el de la gratuidad. Respecto de la unidad jurisdiccional, debo manifestar que en la Constitución vigente se dice que el ejercicio es la potestad judicial, corresponderá en general a los órganos de la Función Judicial y que a futuro, en un sentido progresivo,

se establecerá la unidad jurisdiccional; Y en la vigésima sexta Disposición Transitoria de la misma Constitución del noventa y ocho, se establecía un mecanismo para ir tornando realidad este tema de la unidad jurisdiccional. Y se decía que "...los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la Función Judicial y, mientras las leyes no dispongan algo distinto, se someterán a sus propias leyes orgánicas". Y que además el Consejo Nacional de la Judicatura tendría que presentar al Congreso Nacional los proyectos que debían modificar las leyes pertinentes, para que estas disposiciones constitucionales puedan cumplirse. Compañeros asambleístas, han transcurridos diez años desde que esta disposición legal debía haberse cumplido. Y en diez años, yo debo manifestar, que jueces como los de Policía, jueces militares, jueces en materia tributaria, en materia aduanera, no han pasado a ser parte de la Función Jurisdiccional. Y entonces uno se pregunta ¿por qué no habían pasado dentro de la Función Jurisdiccional? Por razones de mi especialidad, el Derecho Social, estuve muy de cerca presenciando lo que fue el proceso del ingreso de los Tribunales de Menores, a ser Juzgados de Familia, y quiero manifestarles que hubo que hacer una presión inmensa, gigantesca, para que finalmente la Función Judicial absorba a esos tribunales de niñez y adolescencia. Los principales opositores y negligentes cumplidores del principio de unidad jurisdiccional, son los integrantes de la Función Judicial y en particular, del Consejo Nacional de la Judicatura. La unidad jurisdiccional, lo que busca es en términos generales, garantizar también el principio de independencia que ciertamente es un principio fundamental y sustancial; sin embargo de que es un deber ser, no siempre es posible cumplirlo. De hecho, en esta nueva Constitución estamos creando varias jurisdicciones, porque desgraciadamente, en muchas de las materias va a haber permanentemente contienda de intereses, y esa contienda de intereses

necesita ser procesada y definida por alguien que administre, en definitiva, la justicia en la materia de que se trate. Van a haber jueces ambientales, probablemente van a haber y, ciertamente, en la Mesa Tres estamos preparando la justicia constitucional, porque la justicia constitucional no puede estar sometida a ninguna de las funciones del Estado. Es la entidad que va a garantizar el cumplimiento del texto constitucional, que es la máxima norma del Estado ecuatoriano. Por consiguiente, no es posible que esté sometida a ninguna de las funciones del Estado. De modo que es necesario, fundamental, imprescindible relativizar el principio de unidad jurisdiccional y hablar de la realidad. Por supuesto que hay que garantizar la independencia, pero la independencia no solo se garantiza haciendo una mega función absorbedora de todos cuántos vayan a administrar criterios de justicia. La justicia es un derecho para todos, y si queremos garantizar el acceso, tienen que haber tantos cuántos jueces la justicia requiera para ser posible. Esta Constitución así lo va a demostrar. Por eso es que yo había pedido a la Mesa Ocho, que en lugar de este principio de unidad jurisdiccional, se ponga algo mucho más realista, que diga que "Se establece la unidad jurisdiccional dentro de la Función Judicial, no obstante los organismos e instancias facultados por la presente Constitución, los cuales administrarán justicia en la materia especial de su competencia". Eso quiere decir que es necesario relativizar este principio. De la presentación que nos hacen del articulado, los compañeros, encuentro que efectivamente hay allí un juego no muy claro de palabras, por lo que creo que es fundamental buscar una redacción que dé cuenta de esta nueva realidad. Con respecto al tema de gratuidad, yo quisiera dar algunos argumentos, y ojalá el tiempo me alcance. Tuve la oportunidad de dirigir un programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia, hace algunos años, y pude notar que en la primera instancia los juzgados de lo Civil eran los que

más casos recibían en toda la Función Judicial. Pero aproximadamente el setenta por ciento de los procesos que inician o que ingresan a la Función Judicial, no pasan de la fase de prueba, muchos de ellos se quedan en la fase de citación con la demanda y allí concluye toda la intervención de la Función Judicial. Eso ha provocado una carga procesal inmensa y poca justicia. Mucho más grave se daba la situación cuando no habían las pequeñas tasas judiciales que en este momento existen. Había personas que para vulnerar los procedimientos establecidos, presentaban hasta veinte demandas simultáneamente, hasta que le toque sorteada en el juzgado o en la instancia que les convenía o que tenían amigos. Ventajosamente, después del Programa de Projusticia, se instauró un sistema de información que impide que haya doble y triple sorteo de una misma causa, y entonces es fundamental mantener el tema de las tasas judiciales. Pero también es fundamental garantizar otros mecanismos que tornen asequible la justicia, particularmente a los sectores con menores recursos. Pero lo que hay que hacer es lograr que el Consejo Nacional de la Judicatura sea el que determine las materias y las instancias en las que se aplicará la gratuidad, a fin de favorecer y de canalizar esa ayuda de servicio para quienes carezcan de recursos para litigar, porque no todos los clientes del sistema judicial son los de bajos recursos. En realidad los usuarios del sistema judicial son de la más diversa índole, depende de las instancias, depende de la materia, dependen de una serie de factores. Es fundamental sí, ampliar la justicia y mejorarla, en particular en las materias que tienen que ver con la familia, la violencia intrafamiliar, materia penal, todas esas materias requieren de un fuerte apoyo, pero será y deberá ser el Consejo de la Judicatura el que determine técnicamente, con base en estudios de los clientes del sistema, quiénes deberán recibir ese apoyo específico de la total gratuidad. Gracias, Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. El Asambleísta Gómez, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA GÓMEZ HÉCTOR. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a usted y a los distinguidos compañeras y compañeros asambleístas. Podría afirmar sin temor a equívocos, que en el Ecuador la injusticia posee auge, cabida y operatividad inmune. Y no me refiero exclusivamente a las sentencias o resoluciones de jueces y magistrados ni solamente a aquellos que han ido a los centros de rehabilitación, mal llamados así en el Ecuador, sino a los quehaceres y actividades diarias de la vida ecuatoriana. Hay injusticia en las escuelas, en los colegios; hay injusticia en la calle, hay injusticias en los centros de abastos, porque sin objetividad alguna, se puede asumir que un dictamen común y corriente sea beneficioso para unos y sea maléfico para otros. De tal manera que yo considero que hay injusticias por doquier y esas deben ser también tomadas en cuenta, aparte de la Función Jurisdiccional. Debemos, señor Presidente y compañeros, inaugurar en el Ecuador la cultura de la justicia objetiva, en todas partes, en el hogar, en la calle, en el trabajo y hasta justicia para con nosotros mismos, porque a veces también somos injustos con nosotros. Por ello, en aras de alcanzar una justicia imparcial, oportuna, independiente, eficiente, garantista y libre de corrupción, permítame hacer un análisis rápido sobre algunos articulados. En relación a la "Naturaleza, titularidad y ejercicio". Yo creo que debe decirse: "El poder de administrar justicia corresponde al pueblo. Este poder se delega a los órganos especializados para garantizar justicia, quienes en ejercicio de su potestad aplicarán la ley". En el artículo de "Principio de la autonomía". Hay razón cuando se habla de la "autonomía administrativa", porque es necesaria para dirigir las estructuras internas y externas de esa institución. Pero creo que no está bien y hay

que corregirlo, cuando se habla de la "autonomía económica", porque debe ser regulada, debe ser controlada por el Estado y las leyes, toda vez que la discrecionalidad en el manejo económico puede conceder la oportunidad a ésta o a las instituciones en general, para proceder a hacer gastos o desembolsos exagerados, como aquellos sueldos dorados, como gastos innecesarios superfluos que van en contra del mandato ciudadano. Me satisface mucho leer, en el artículo de la gratuidad, que realmente hasta allá vaya direccionado el proceso. Sin embargo, no puede ser de oropel, no puede ser de papel, no puede ser como en otras circunstancias en donde se dice el treinta por ciento del presupuesto irá a la educación, y la educación, por más de veinte años, dice la Constitución, será gratuita. ¿De qué gratuidad estamos hablando, por ejemplo, en la educación, si todos los días o cada semana en las escuelas fiscales, fiscomicionales y particulares se pide esto y eso y eso al padre de familia, y los alumnos y los niños no quieren ir a la escuela por aquello? Que no se repita esta nefasta información, también en lo que se refiere a la gratuidad en la justicia, que sea de verdad, que los que están guardando prisión en las cárceles, tengan de verdad el abogado defensor para que sin costo alguno ellos puedan ser defendidos. Porque a veces por falta de una carrera de un taxi, a veces por falta de una cantidad de dinero, duermen eternamente el sueño de los justos en las cárceles, y a veces lamentablemente, siendo totalmente simples y sencillos en su actividad, no tienen culpabilidad en muchos casos, señor Presidente. Continuando con mi criterio, permítame reflexionar sobre la "Unidad Jurisdiccional". Debe decirse: "La unidad jurisdiccional refiere a la potestad exclusiva del Ministerio de Justicia". Sin embargo, aquí tengo que hacer un paréntesis. La Mesa número Dos, propuso que en la Función Electoral hayan dos organismos, dos instituciones, uno de ellos el Tribunal Contencioso Electoral. Si hacemos referencia al tema de que la unidad jurisdiccional refiere a la

potestad exclusiva de administrar justicia, entonces se quedaría sin piso la propuesta aprobada por la Mesa número Dos, en lo que se refiere al Tribunal Contencioso Electoral, de la que ya hemos dicho y aprobado, que será una sala exclusiva de la Función Electoral, para asuntos jurídicos. De tal manera que hay que reglamentar muy bien en ese asunto, para no chocar con los criterios ya aprobados. Con respecto a los criterios de designación creo que debe regularse aquello. Para la selección y designación de jueces y magistrados deberán considerarse "cinco años" y no para siempre, hasta que muera el titular. A veces, en muchos casos ya el tiempo va agravando el proceso de intelectualidad y obviamente, disminuye, porque no es lo mismo, señor Presidente, tener cincuenta, cuarenta, que setenta y ochenta. Entonces yo creo que sí tiene que haber discrecionalidad en el tiempo en que estos servidores van a contribuir con la justicia en el Ecuador. Entonces sería solo para "cinco años", tiempo en el cual se someterán a nuevo concurso de méritos y oposición para continuar en la carrera judicial, y la participación será prenombrada para cada concurso. La carrera profesional, para mí, debería tener nuevamente la regulación necesaria. "Las regulaciones de la ley velarán por la alternabilidad en determinado tiempo, -decíamos cinco años- sujetándose a los respectivos concursos de méritos y oposición". De tal manera que se pueda dar la oportunidad a profesionales jóvenes. Hay muchos profesionales, con conocimientos actualizados, que simplemente se quedan como secretarios, se quedan como abogados de libre ejercicio, pero jamás tendrán la facilidad de ser jueces o magistrados, porque ahora están nominados para eternas memorias. Hay que dar la oportunidad al profesional joven, para que llegue a ocupar este lugar en la administración de justicia. Finalmente, señor Presidente, quisiera también referirme a un artículo que probablemente se olvidó o a lo mejor pensaron que no era necesario, pero para mí es coherente.

"Cualquier violación a los principios de la administración de justicia conllevará una responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la Ley". Disculpe, señor Presidente, compañeros. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Columba, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA COLUMBA FRANKLIN. (Introducción en Kichwa) ...Presidente de la Asamblea, estimados asambleístas, amigos, hermanos: Quisiera pues de antemano felicitar a esta Mesa, que ha trabajado en esto de lo que es la administración de justicia, ya que realmente es fundamental para nuestro pueblo ecuatoriano, para nuestra sociedad y que ojalá pues desde ahora en adelante realmente se hable de una verdadera justicia y se acabe con las malas justicias que se han venido dando en nuestro país, en donde desgraciadamente los únicos que se han tenido que privilegiar con la justicia han sido los partidos políticos o han sido personajes que solamente han querido enriquecerse a través de la justicia. Yo me pregunto, compañeros y hermanos: Cuando nosotros estamos hablando de justicia, ¿de qué justicia podríamos nosotros hablar, cuando realmente nosotros solamente lo estamos viendo la justicia en la parte, justicia económica o justicia de dinero? Deberíamos cambiar también esa mentalidad, y creo que desde aquí deberíamos mandar ese mensaje a la sociedad, de que nosotros debemos realmente enmarcar en una verdadera justicia desde hoy en adelante, y acabar con las injusticias que han habido en este país. Lamentablemente, no podríamos hablar nosotros, de justicia, cuando nosotros también somos injustos ante las cosas o injustos con nosotros mismos, con nuestros compañeros o con nuestros hermanos o con nuestra sociedad. Deberíamos hablar de una verdadera justicia, cuando nosotros también demostremos a toda la sociedad, el de la

solidaridad, el respeto, el convivir y el del buen vivir en este país. Creo que el entendimiento profundo de realmente entender al corazón y al alma y al espíritu, debería ser un paso tan importante, que deberíamos exigir y deberíamos aplicar dentro de esta justicia, de que haya ese buen vivir, de que se acabe con la mala injusticia, de que no solamente personajes que llegan a ciertos espacios, tengan el derecho de la justicia, y los que no, sigan siendo injustificadamente puestos a un lado. Realmente nuestra Pacha Mama y la justicia de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, la justicia que ellos han hablado siempre, ha sido de un convivir en bien, de un vivir en armonía y en equilibrio con la sociedad, con el pueblo; en un vivir mancomunadamente en unión entre las mismas familias. No hablo de la familia, simplemente en el campo sanguíneo, sino de una familia total, que debemos mirarnos y deberíamos aplicar entre todos nosotros el ñucancancami. El ñucancancami es el yo soy tú, y no mirarnos distintos ante los demás, sino mirarnos como somos, seres de tierra, de fuego, de aire y de viento; seres que necesitamos vivir en armonía y en equilibrio en este país. Quisiera pues que realmente a través de la justicia realmente haya una justicia de igualdad y se acabe con las injusticias, que solamente los que han tenido que pagar dinero, vendiendo sus animales, sus granos, sus frutos, sus terrenos, han sido la gente de mi pueblo, la gente de la comunidad, la gente donde han sido incluso desterrados de los mismos territorios, de los terrenos, que han sido explotados, por los terrenos, en las mismas comunidades, en donde por defender un pedazo de terreno, de tierra, realmente han sido que tener ser enjuiciados, hasta metidos en la cárcel, por el hecho de que solo el patronazgo o el señor que solamente maneja el poder económico, ha tenido que servirse de la justicia. Por eso yo quisiera pues en este campo, en vista de todas estas injusticias, realmente en este primer artículo, donde dice: "De la naturaleza, titularidad y ejercicio. La justicia es el valor fundamental

del Estado social y democrático de derecho". ¿Por qué no hablar ya de una justicia intercultural? Porque si estamos hablando realmente aquí, de crear la unidad, la solidaridad, pues hablemos también de mirarnos de los unos a otros, como interculturales, como por ejemplo, de indios a mestizos, de mestizos a blancos, de montubios a indígenas, de negros a montubios y, así un sinnúmero de cosas. Creo que cada pueblo o cada sector tenemos nuestras formas de mirar, nuestra cosmovisión de hacer también justicia. Por eso yo pediría pues que en este campo se incluya lo que es de derecho intercultural, porque es necesariamente, y pediria de que se elimine uno de los presupuestos éticos, que no entiendo el porqué, y poner: "Que garantiza la convivencia pacífica, armónica y equilibradamente junto a la naturaleza". Hemos venido escuchando que estamos defendiendo la naturaleza, pues pediría, esa es mi visión de acuerdo desde mi punto de vista. Dentro de la potestad de administración de justicia emana, aquí hay por ejemplo, en donde pediría que se elimine donde dice: "por los demás órganos y funciones" que quedaría en un total decir: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida por órdenes de la Función Jurisdiccional y establecida en esta Constitución y en la Ley". De la misma manera, quisiera también argumentar en donde dice la "unidad jurisdiccional". Se establece la unidad jurisdiccional, en donde hay un punto de vista de mi parte, que pediría, no sé, que se, que se verifique o se vea, pediría a la Mesa, que dice: "Ni de las entidades de régimen seccional o autónomo". Se debería eliminar eso, para que quede: "Se establece la unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad de los restantes funciones y órganos del Estado podrá desempeñar directamente funciones de administración de justicia, sin perjuicio...", bueno, o continuadamente. Dentro de la gratuidad, "la administración de justicia es gratuita en todas sus materias e instancias". No sé, pediria también otro instante, otras palabras que se

deberían también analizar. Yo, pues pediría se retire eso, no sé, pero que se quede solamente como: "La administración de justicia es gratuita, salvo los proceso en materia tributaria", bueno, que diría así. La palabra "con excepción", no comprendo, quisiera que en esa parte también se vea. En lo que es publicidad, los juicios, que se elimine la palabra "toda", sería: "Los juicios en sus etapas y las resoluciones serán públicas, salvo los casos", bueno continuadamente. Esto, dentro del articulado de naturaleza del sistema procesal, no sé de qué se debería decir, de que no se sacrificará a la justicia. No entiendo y pediria a la Mesa, pues, que se verifique, se vea, ¿de qué es eso de no se sacrificará? Quisiera pues complementar con esto, dándole mis pequeñas visiones, de acuerdo a mi manera de ver, pensar, y... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, señor Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA COLUMBA FRANKLIN. ...creo que es necesariamente que realmente demos una verdadera, un verdadero articulado para nuestro pueblo y para nuestra sociedad ecuatoriana. Una vez más pues felicitándoles a la Mesa, y yupanchami Presidente de la Asamblea, yupanchami, asambleístas. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Acosta, por favor. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ACOSTA DIANA. Gracias, señor Presidente. Voy a ser bastante breve, dado que ya varios colegas acertadamente han dicho mucho de las acotaciones acá. Pero empiezo por felicitarle por su acertada decisión de no injerencia en la Función Judicial, lo cual sería bastante contradictorio, si aprobamos hoy día el principio de independencia en la Función Judicial. Aplaudo su acierto, pues no podemos ni nosotros ni nadie meterse en una función distinta. De allí la

unidad jurisdiccional y la independencia. Pero, asimismo, antes de empezar la intervención, con mucha pena debo manifestar que aquí no se respeta a la mujer ecuatoriana, y espero que en futuras ocasiones la Mesa Directiva procure que los miembros de esta Asamblea guarden el respeto, el decoro a la honorabilidad, a la honra de las personas en esta Asamblea, en especial de las mujeres, y de alli me solidarizo con María Augusta Calle, que también tengo el conocimiento que ha sido ofendida. Pues ninguna mujer ecuatoriana ni en ninguna parte del mundo merece ofensas por parte de nadie. Y esperemos que en un futuro esta Asamblea y la Mesa Directiva hagan respetar los principios éticos que aquí mismo se aprobaron. Prosigo, en estricto derecho. En realidad, como ya todo se ha dicho, solo voy a mencionar las partes con que más me llevan a la situación de decirlo. En el tema del sistema procesal, ya lo han explicado, la diferencia que hubo ante principios y características, e insisto, no son principios, son características. Por ejemplo, empieza diciendo que "las leyes procesales se consagrarán por los principios de oralidad". Pero sin embargo, en el artículo de oralidad, lo llaman como un "sistema de oralidad". Entonces ¿la oralidad es un sistema? o ¿es un principio? Es un sistema, evidentemente, no es un principio. Entonces ¿por qué no se le cambia esa palabra? Si bien quieren, como dice la Constitución Bolivariana de Venezuela, que dice casi lo mismo: "Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia". Entonces, de repente, cambiar esa palabra de no *principios, porque jurídicamente no es un principio, es una* característica, es un sistema, como acertadamente lo llaman, en el artículo de la oralidad, un sistema que anteriormente lo ponen como principio. Entonces debería ser asi y no ponérselo de esta manera, o corregirlo, porque no puede ser principio y sistema al mismo tiempo. Tiene que ser uno de los dos, y me inclino por sistema, porque principios, jurídicamente expliqué la vez anterior, que no lo eran. En el

tema mismo de la oralidad, estoy de acuerdo con que sea un sistema, y vuelven y dicen: "Dentro de los principios de concentración, contradicción, intermediación, dispositivo". Esos no son principios, esas son características que acarrean a los principios, estas son características que llevan a ser realidad estos principios; que la justicia sea veraz, que haya primacía de la realidad, no llega sino a través de que sea ágil el proceso. ¿Cómo va a ser justo, si no es ágil? Tiene que ser ágil. ¿Cómo va a ser justo si no hay intermediación? Tiene que haber intermediación del juez. Son características que nos llevan a eso, no son principios. La vez anterior cité a varios autores nacionales e internacionales y pido se tome en cuenta. Quizá para muchos sea mera palabra que no significa nada, pero significa mucho en materia legal, significa mucho en materia doctrinaria, y si queremos una Constitución buena y que sirva de ejemplo, pues tratemos y procuremos hacer las cosas bien. También la vez anterior hablé sobre el sistema dispositivo e inquisitivo, y sugerí que se lo ponga además de "dispositivo", como ya consta aquí, el "inquisitivo" inclusive. Porque entonces ¿qué va a pasar en los casos penales donde el sistema es netamente inquisitivo? Inquisitivo quiere decir, perteneciente o relativo a la indagación o averiguación, si es así, inquirir que el juez o el fiscal inquiere y busca la verdad de los hechos, va a buscar la realidad, pregunta, averigua, pero si lo limitan solo al dispositivo, entonces no se puede hacer eso. En los sistemas penales ya pasa, pero sería contradictorio que la Constitución diga que solo hay un sistema y que no hay el otro. Entonces ¿qué pasa con el sistema penal?, ¿qué pasa en los juicios laborales?, donde ahora, por ejemplo en el tema laboral los juicios son orales y el juez también inquiere en aquello, en las preguntas, averiguando, para que justamente a través de este sistema inquisitivo haya también la intermediación del juez, que el juez se involucre en el proceso y que no sea un simple convidado de piedra, que no es lo que

queremos. Es necesario poner el sistema inquisitivo, inclusive para que pueda llevarse a cabo otros aspectos. La semana pasada debatimos sobre los temas de la naturaleza, y un sistema, una parte muy importante fue la del artículo uno literal b), que estipulaba que la carga de la prueba sobre el daño potencial o real, recaerá sobre el agraviado o demandado. Esto quiere decir una inversión de la carga de la prueba. Al momento de eso, de que haya algún sistema que administre justicia, ya sea de la naturaleza, también va a tener que inquirir, va a tener que averiguar, pero no puede porque solo lo limitan al sistema dispositivo. Es decir, dispositivo quiere decir que las partes van y mediante oficio presentan, y el juez no puede hacer nada más lo que las partes le dicen; entonces, es necesario. Inclusive en ese mismo tema, yo propuse que se agregue un párrafo muy necesario, porque si estamos luchando por los derechos de la naturaleza, lo cual considero muy bien, también hay otros derechos como de los seres humanos, y propuse que se ponga a continuación de aquello, una frase que diga así: "En los procedimientos seguidos por acoso sexual en el lugar de trabajo, por delitos sexuales a menores de edad y reconocimiento de paternidad, la carga de la prueba corresponderá al accionado y su procedimiento será de carácter inquisitivo". La carga de la prueba corresponderá al accionado, tal cual ya lo propuso la Mesa Cinco, en sus artículos, no debía estar aquí, debe de estar aquí. Y es cierto, en ciertos procesos la carga de la prueba tiene que corresponder al accionado. ¿Por qué?, porque una menor de edad violada no puede ir a probar que no lo hizo. Tenemos que ser sensibles ante esa realidad, y tenemos que ser sensibles ante la necesidad de justicia. Ahí tiene que haber inversión de la carga y que el adulto pruebe que no lo hizo, no la menor de edad porque sería violada doblemente. En el caso de reconocimiento de paternidad, cuántas madres solteras, que porque no tienen los recursos para probar que él es el padre, porque él no quiere hacerse el examen, se quedan

simplemente sin nadie que le sustente el alimento para sus hijos. En esos casos tiene que haber una inversión de la carga de la prueba, y el sistema tiene que ser inquisitivo, para que el juez vaya y pregunte, y no simplemente la mujer, que muchas veces no tiene los recursos para hacerlo, tenga que pedir, tenga que rogar al abogado, inclusive con las tasas judiciales, de que esto se perpetre. Entonces yo creo que es importante concienciar un poco en este tema humano y que, por favor, sea sensible ante esta realidad, y que si bien se quiere la inversión a la carga, la prueba, con la que estoy de acuerdo, nos pongamos sensibles en estos tres temas: acoso sexual en el lugar de trabajo, que nunca se puede probar una mujer que el jefe le acosó, por la relación de superioridad que tiene, hemos visto últimamente casos y son terribles. La mujer ecuatoriana merece ser defendida aquí, empezando desde esta sede, que se la defienda aquí. Segundo, delitos sexuales perpetrados a menores de edad, es necesario; y, tercero, en el caso de reconocimiento de paternidad, yo estoy segura que las mujeres de esta nación lo van a agradecer, y no va a causar ningún perjuicio, sino mucho beneficio, porque es un sistema y un caso de derechos humanos. Gracias. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Reyes, por favor. ----------

LA ASAMBLEÍSTA REYES CRISTINA. Gracias, señor Presidente. Compañeros asambleístas: Qué importante que es discutir estos textos constitucionales referentes a la Función Judicial, función que ha sido menoscabada, desprestigiada injustificadamente, por la injerencia de asuntos políticos y económicos que no responden a lo que es ese pacto social, entregar la administración de justicia a manos de otros seres humanos. Han sido los propios funcionarios de ese poder del Estado, quienes han primado la ilegalidad sobre la legalidad, en vez de la sana crítica y la inmoralidad sobre la probidad. Es por eso que quiero felicitar

el esfucrzo de nuestros compañeros de la Mesa número Ocho, por condensar principios de la Función Judicial, por mejorarlos y por incorporar algunas de las observaciones que se hicieron en el primer debate. En ese sentido, pienso en el tema de los principios, ya hay algunos, como se lo ha manifestado, principios que fueron recogidos de la Constitución del noventa y ocho, como por ejemplo de que la Función Judicial sea independiente, autónoma, única, pero han sido bien sistematizado en un articulado más preciso y más claro. Creo también fundamental que se haya incorporado responsabilidades civiles y penales a todos aquellos quc interfieran en la administración de justicia. Hemos visto a lo largo de la historia del Ecuador, tantas interferencias e arbitrariedades, y es bueno que ahora se establezcan responsabilidades. Respecto al principio de la unidad jurisdiccional, tengo algunas observaciones, como ya lo han hecho algunos compañeros, y es que tal como se ha pregonado, debe ser los depositarios de la administración de justicia tiene que, se ve debilitado con órganos paralelos, como ya la Mesa número Dos ha presentado, por ejemplo, una Corte Electoral, y no es de función exclusiva de la Función Judicial, la unidad jurisdiccional. Así que la existencia de una Corte Electoral, creemos y sostuvimos, que bien pudo haberse omitido y crearse salas especializadas o en lo contencioso administrativo en última instancia, para tratar los casos a este efecto. Además, considero también, aunque sé que se está tratando en algún otro articulado el tema de establecer dentro de los principios constitucionales, la solución alternativa de los conflictos y también el tema de los jueces de paz. Ahora, hay un principio que creo que no ha sido incorporado, y me parece fundamental, y es el principio de legalidad. Quc se establezca que todos los jueces y magistrados o todo aquel funcionario que administre justicia, debe proceder a actuar con sujeción a la Constitución y a las leyes. Dicho aporte también recoge la altísima

realización de la justicia, el efectivo respeto a las garantías del debido proceso. Con respecto a los articulados número ocho y número nueve, pienso que se puede condcnsar en un solo artículo, fin de procurar especificidad en el artículo propuesto, sobre todo en lo quc se reficren a los casos del concepto de inmovilidad y la designación de los profesionales dentro de la carrera jurisdiccional. Son básicamente esas las observaciones, señor Presidente, y quiero finalizar, compañeros asamblcístas, diciendo de que esta Constitución, estos textos constitucionales son el único mccanismo que tenemos los asambleístas, para estructurar la Función Judicial. Yo aplaudo y felicito, señor Presidente, pues, su claro manifiesto de que esta Asamblea no interfiera en la Función Judicial. Cuidado, compañeros asambleistas, vía mandato meterle mano a la Función Judicial, cuidado, esta Asamblea desestabiliza el Estado de derecho. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Romo, por favor. ----------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. Gracias, señor Presidente. Solamente un comentario breve que creo que puede mejorar un texto bastante bueno, del quc nos sentimos orgullosos y con una opinión que creo quc se comparte en la mayoría de la sala. Solamente una pequeña reflexión. En la Comisión del CONESUP, en que tuve el honor de estar, se analizó la posibilidad de llamar a esta función, Función Jurisdiccional, en tanto comprendiera la rama de la Función Judicial o la justicia ordinaria, y la rama de la justicia constitucional. La Asamblea, la Mesa Tres, la Mesa Ocho, varios asambleístas de diferentes sectores políticos, han propuesto y estoy de acuerdo, que la Corte Constitucional sea un órgano autónomo y, por lo tanto, no se encuentre dentro de esta rama. Por esa consideración, señor Presidente, creo que ya no es conveniente llamarlo Función Jurisdiccional, y que

Función Judicial, sería una denominación suficiente, mucho más clara y además la que hemos acostumbrado en la estructura institucional desde el inicio de la República, que creo que se ajusta mucho más al contenido de la propucsta. Explico que el término "Función Jurisdiccional" se tomó en cuenta en el caso en que comprendiera estas dos ramas: la de la justicia ordinaria y la de la justicia constitucional. Yo habría preferido que en el artículo que habla de la unidad jurisdiccional, que creo que tiene una reforma muy buena, se incluya también el tema de la potestad de administrar justicia o del reconocimiento a las formas de administración de justicia indígena o de justicia consuetudinaria. La Mesa ha creído conveniente que eso se encuentre en un texto distinto, y también estoy de acuerdo, pero me gustaría decir que el tema de pluralismo jurídico no es ningún invento del movimiento indígena ecuatoriano, no es un invento de esta Asamblea. Es un tema reconocido, aceptado y practicado en varios países del mundo, desde Australia hasta Colombia, pasando por todos los países signatarios del Convenio Ciento sesenta y nueve de la OIT, y el pluralismo jurídico ya fue aceptado por nosotros, hace diez años, cuando reconocimos entre los derechos colectivos, el derecho de que la justicia consuetudinaria se aplique en ciertos casos y con respecto a los derechos humanos, que es el sentido en que nos hemos pronunciado y que vamos a poyar más adelante. Sobre las transitorias de las que ha hablado la compañera Betty Amores, creo que es importante que la Mesa Ocho considere la posibilidad en concordancia con el principio de unidad jurisdiccional, considere la posibilidad de proponer ya una Transitoria que ordene la incorporación a la Función Judicial de la Corte Penal Policial y de la Corte Penal Militar, para que no quepa duda sobre la voluntad de la unidad en esos temas, reconociendo la flexibilidad, la relativización del principio, para la Corte Electoral, para la Corte Constitucional y por supuesto para la administración de

justicia indígena. Insisto, y ojala los compañeros de la Mesa tengan la apertura para discutirlo, que sería más conveniente llamarlo "Función Judicial", por claridad y comprensión. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el Asambleísta Viteri. El asambleísta Chacón, entonces, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CHACÓN SERGIO. Gracias, señor Presidente. Bueno, igualmente quiero felicitar la labor de la Mesa, algunas sugerencias han sido tomadas en cuenta. Sin embargo, creo que hay que insistir algunos aspectos que la Mesa no ha incluido y que a nuestro parecer deberían ser afirmados en la nueva Carta Política. Me refiero en primer lugar, al hecho de que la Constitución vigente garantiza la independencia funcional de jueces y magistrados, señalando que éstos serán independientes en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, y que solo cstarán sometidos a la Constitución y la ley. Con lo cual, obviamente se estaría además afirmando el principio de legalidad, al que se ha referido la asambleísta Cristina Rcyes. Tomando en consideración lo que ha señalado la asambleísta Romo, de que no solamente, no solamente la Función Judicial va a ejercer potestad de administrar justicia, sino también otros órganos como la Corte Constitucional, yo creo que el precepto de independencia que está contemplado en el artículo dos, que dice que: "Solamente los órganos de la Función Jurisdiccional en el cumplimiento de sus deberes son independientes", yo creo que hace falta ampliar este principio de independencia, en general, a todos los jueces y magistrados. Por ello, si es que la Mesa no considera oportuno reiterar el precepto de la Constitución del noventa y ocho, creo que por lo menos se debería incluir que: "Los órganos de la Función Jurisdiccional o Judicial, -como quiera que se llame- los jueces y magistrados en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus

atribuciones son independientes". De esta manera, este carácter que es indispensable en todo juzgador, estaríamos reconociéndolo con sentido amplio y no con sentido restrictivo, como está en el proyecto. Igualmente, nosotros habíamos propuesto que en el artículo tres, para afianzar la autonomía administrativa, económica y financiera de la Función Judicial o jurisdiccional, se establezca lo que señala el proyecto del CONESUP, quc "las rentas se transferirán automáticamente en cada ejercicio económico, a favor de esta Función del Estado". No se ha tomado en cuenta, igualmente, este asunto, y considero que debería ser analizada la posibilidad de insertar este precepto. En el artículo cinco, referente a la gratuidad, en consonancia con lo que ha venido promulgando nuestro partido, nosotros habíamos propuesto a la Mesa, de que se contemple la gratuidad absoluta en todas las materias. Nosotros observamos, que por lo menos se ha corregido lo que estaba en el proyecto originario, de dejar a la ley así, con el carácter muy genćrico, de que establezca un sinnúmero de excepciones, y por ese lado de excepciones pudo haberse roto completamente el principio de gratuidad. Creemos que, en todo caso, existe un avance al haber delimitado, especificado las materias en las cuales se van a cobrar, en lo tributario, en lo mercantil y en lo civil, con excepción, dice aquí, de los temas de familia. Pero a nosotros nos preocupa un segmento importante quc es lo atinente a las acciones por daños y perjuicios. Estamos declarando de que la naturaleza es sujeto de derecho. Pero ocurre que cuando le provocan a una comunidad pobre un daño ambiental, esta comunidad no puede demandar los daños y perjuicios porque tiene que pagar una tasa. Miren ustedes, por ejemplo en el caso de Esmeraldas, a la Refinería se le condenó a pagar veinte millones de dólares por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los pobladores jamás habrían podido demandar, si es que en la demanda planteaban una cuantía de veinte millones, porque aquí en el Ecuador, para fijar la

tarifa, se ha asociado al monto de la cuantía y se venía estableciendo el uno por ciento de la cuantía. El uno por ciento de veinte millones es una suma muy elevada, muy grande que no necesariamente pueden cubrirlo muchas personas en nuestro país. Por tanto, yo propongo que aparte de los temas relacionados con familia, se excluya en lo civil, las acciones por daños y perjuicios, para de esta manera poder ejercitar una serie de acciones por violación de derechos humanos y también de los derechos de la naturaleza o de los derechos del ambiente. Igualmente, quiero felicitar a la Mesa, por el hecho de que se haya garantizado el principio de publicidad, sin repetir la prohibición de transmisión de las diligencias o actos procesales por parte de los medios de comunicación. Esta era una disposición que constaba en la Constitución anterior y que realmente no es conveniente volver a consagrar tal precepto. Creo que como está formulado es correcto, porque la ley debe efectivamente regular en qué casos se transmiten las diligencias, y en qué casos no, y creemos, efectivamente, que no se pueden transmitir las diligencias con el ánimo de perjudicar a una de las partes exclusivamente, debe transmitirse en forma íntegra. Pero en todo caso esto será objeto de regulación legal y nos parece acertado. Nosotros deploramos el hecho de que en el artículo siete no se haya tomado en cuenta nuestra sugerencia. Habíamos planteado de que aquí en el proyecto solamente se está censurando, reprochando el retardo en la administración de justicia y la negligencia, imputables, se dice ahora ya, a jueces, magistrados u otros funcionarios. Pero nosotros creemos que en la administración de justicia también, aparte de la negligencia, que tiene que ver con la culpa, existen actos dolosos, actos de dolo; es decir, el designio de causar daño, de causar perjuicio a una de las partes procesales, y creemos que se debe incluir, aparte del retardo o negligencia en la administración de justicia, también los actos dolosos, imputables a los funcionarios judiciales que deben ser objeto de

sanción y de represión, para de una u otra manera ir corrigiendo este segmento de la administración de justicia, que hoy en día está tan venido a menos. Muchas gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. La asambleísta Godoy, por favor. ----------

LA ASAMBLEÍSTA GODOY GINA. Buenas tardes. Perdón el retraso. Gracias, compañero Presidente. Compañeros y compañeras asambleístas: No quiero empezar mi intervención sin antes expresar mi agradecimiento por las palabras de la compañera Mae, en un primer debate; por el compañero Vicente, pero también agradecer a los integrantes de la Mesa, quienes precisamente han contribuido a que el debate de estos principios, realmente no solamente se dé con altura sino con ese gran compromiso, que quienes estamos en esta Asamblea Constituyente y en cada una de las Mesas, estamos respondiendo ante ese mandato ciudadano, compañero Presidente. A cada uno de los integrantes de la Mesa Ocho, mi más sincero agradecimiento y un abrazo afectuoso. También agradecer a Fernando, por haber depositado la confianza de coordinar el debate y en ese sentido poder compartir en esta pequeña intervención, lo que ha sido producto de la discusión, pero que también hoy nos ha permitido llegar a este momento y compartir con ustedes en este segundo debate estos principios, principios que no son los únicos, y que Mauro lo mencionó cuando empezó su intervención. Tenemos otro, que precisamente lo recogemos de los aportes que vinieron en esos veintinueve textos que contribuyeron a enriquecer este debate y que la Mesa resolvió discutirlos en un segundo momento, en un proceso completo, para que vengamos con un segundo paquete, por decir un nombre, a este Pleno, con los otros principios que nos faltan y que creemos importante dar el

procedimiento que ellos ameritan y que se merecen. En relación, como intervención, compañero Presidente, me centraré en dos temas que se han debatido a lo largo de la Mesa y que corresponde, y que también son parte del debate, precisamente de este Pleno, y que tienen que ver con el tema de la unidad jurisdiccional y de los otros principios, que estaba diciendo yo, lo hemos dejado para un segundo momento. Gracias por proyectar el texto del artículo cuatro. Solamente quisiera invitar a quienes estamos en el Pleno, a observar las últimas tres líneas, a partir de lo que dice: "sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos u autoridades." Es pertinente, es pertinente, señalar tres aspectos fundamentales en este texto, y es precisamente el principio de la división de poderes, la supremacía de la Constitución, y el Estado como un orden jurídico. El principio de la división de poderes o, más técnicamente, de funciones, tiene por objeto la limitación y el equilibrio del poder, con la precisión de que sus iniciales pensadores, como Locke y Montesquieu, afirmaban que: "no podrían concentrarse en una misma persona o la misma corporación funciones que arriesguen la libertad y la confianza de sus gobernados". Y a partir de este pensamiento, se estableció en el siglo XVIII una división de funciones de carácter tripartito y horizontal. Como es evidente, este principio de hace tres siglos, jamás se ha mantenido tajante e inflexible, sobre todo, cuando la teoría del Derecho reconoce que la división tradicional se ha diversificado en separaciones, como las de carácter temporal, las de carácter vertical o de división decisoria y social de poderes, que responden al fin último de la división de funciones, la limitación del poder y la protección de las libertades de los seres humanos, contenidas en el marco ético jurídico de los derechos humanos, contemporáneamente. El principio de la supremacía de la Constitución, en cambio, se manifiesta en la prevalencia de la Constitución como norma y como funcionamiento expedito de la

asignación de funciones y reparto de competencias entre los órganos fundamentales, pero que pueden quedar obstruidas en tanto varios órganos se crean competentes para ejercer una misma atribución, como ha sido el caso en el Ecuador, de quién debe ser el rector de la lucha contra la corrupción. ¿Una comisión, una contraloría o un ministerio público?, O todo lo contrario. Cuando ningún órgano se cree competente, o peor aún, cuando uno tiene atribuciones, retarda indefinidamente el cumplimiento de sus fines, como ha sido el de la justicia en el tema electoral y su consecuente impunidad, a no sancionar a partidos políticos que no han respetado las reglas y normas que otros y otras hemos obedecido. Así, esta Asamblea Constituyente, que organiza al Estado como orden jurídico, ha visto la necesidad histórica de asignar funciones y competencias en la división de poderes, al sistema electoral y constitucional. Este orden jurídico, dentro de la teoría normativa de Kelsen, es un sistema de normas generales e individuales, enlazado entre sí, de acuerdo al principio que el derecho regula su propia creación. Y en su teoría general del Derecho y del Estado, él reconoce dos funciones como parte de este orden jurídico: la creación de normas, y la aplicación de las mismas, y acepta que no existe una separación tajante de las mismas, pero que sí poseen independencia. Como los argumentos anteriores, considero que el principio de unidad jurisdiccional reconoce estas dinámicas: Uno. La Constitución como la norma primaria y creadora del orden jurídico y asignadora de funciones y competencias. Dos. La unidad del sistema. Tres. La independencia de cada función del Estado como garantía de limitación del poder. Y Cuatro. Que el sistema jurídico más completo es aquel que resulta eficaz sobre la base de la realización social de los más fundamentales principios de la democracia, como lo expresó Cristian Alfaro. Consecuentes a este principio, se ha entregado a ustedes, la redacción de los artículos referentes a los principios de independencia y

autonomía, completando así la dinámica del principio de unidad jurisdiccional. En algún momento hubieron en la Mesa, quienes no reconocieron tales dinámicas y ni siquiera la concepción de lo que se refiere a la unidad jurisdiccional, como una garantía de la independencia de poderes, consagración de una justicia técnica y limitación del número de instancias, simplemente no han reflexionado sobre el alcance que debe darse a la unidad del sistema organizativo del Estado. Por otro lado, gracias a los aportes y observaciones enviados desde ustedes, hemos visto la necesidad de recapitular el debate sobre los principios de administración de justicia, para incluir otros que responden a un Estado constitucional, como el que estamos esbozando. Este debate debe incluir propuestas, como la presentada por la compañera Tania Hermida, por ejemplo, sobre los principios de la democratización de la justicia, que abarca la accesibilidad al sistema de administración de justicia, a través de la garantía, para quienes no comprenden los tecnicismos jurídicos. En la misma propuesta, se encuentra el principio de corresponsabilidad social, que reconoce que las normas de carácter penal, especialmente las de régimen penitenciario, deben tomar en cuenta las causas y dinámicas estructurales para el cometimiento de un delito. El fin último, como lo expone el artículo de la compañera, es flexibilizar las penas y restituir la justicia social. Y finalmente, habla sobre el principio de interpretación cultural, que permite a los jueces la posibilidad de invertir la carga de la prueba o tomar otro tipo de acciones afirmativas de carácter procesal, cuando existen situaciones de discriminación estructural, que sería un principio histórico en los derechos de personas o colectivos que viven día a día en la impunidad. Es importante reconocer también, que la propuesta de la unidad jurisdiccional responde a un paraguas en lo que es precisamente la justicia, entendiéndose dentro de este paraguas, y ya Rosa Elena lo va a contar con mayor detalle, no solamente a la justicia

ordinaria, sino también a los entes autónomos, como lo es y como lo denominamos ahora, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría Pública, que no son entes que administran...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, compañera. ----------

LA ASAMBLEÍSTA GODOY GINA. Gracias, compañero Presidente. Que no son entes que administran justicia, pero que definitivamente tienen una gran responsabilidad, en el sentido de aportar con elementos suficientes para que la justicia cumpla su objetivo principal. Muchísimas gracias, compañero Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleista. Tiene la palabra el asambleísta Rohón, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Gracias, señor Presidente. Voy a hacer varias observaciones puntuales, toda vez que el tema ha sido ampliamente debatido, y me quiero concentrar en alguna de ellas. Sin duda, es importante que la Función Jurisdiccional sea autónoma, sea independiente y que guarde ese principio básico de la unidad jurisdiccional. Esta tarde, usted ha tenido un acto de prudencia y sabiduría, señor Presidente, cuando de manera muy clara y categórica, ha manifestado su criterio a la Asamblea y al país, de que de ninguna manera está de acuerdo con que la Asamblea Constituyente, con un nuevo mandato termine con la Función Jurisdiccional. Y eso lo que hace ver de manera muy clara, es la necesidad de preservar la independencia de poderes. Ayer manifestaba, que en la Asamblea paralela en la Universidad Eloy Alfaro, el principal asambleista de PAIS, debate con ustedes, pero nos priva a los ecuatorianos, de un debate aqui en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo

fundamental de esa aseveración que hice ayer, no es respecto a la Asamblea paralela que funciona en Manta, sino a la necesidad de mantener y preservar la independencia de poderes; que el Ejecutivo deje libre, independiente y tranquila a la Asamblea Constituyente, al Legislativo. No hay, no hay registro en la historia del país, de los últimos años, desde que regresamos a la democracia, de que un Presidente, de que el Ejecutivo tenga esa influencia directa en el Legislativo. Se debe preservar la independencia de poderes, el Ejecutivo debe dejar de utilizar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y espero que esa firmeza, Presidente, que le aplaudo y le reconozco públicamente, que ha tenido hoy en ese acto, claro, prudente, también se lo haga en los otros aspectos, porque es fundamental la independencia de poderes en el Estado ecuatoriano, sino no avanzamos, sino avanzamos como debemos avanzar, porque hay intromisión. Y ayer mencionaba a uno de los presidentes, importante Presidente de la historia republicana de la nación, mencionaba al doctor Rodrigo Borja Cevallos, que coincidentemente, en su época, él tenía control, su partido político, de los tres poderes, del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, y nunca vimos al Presidente de la República en el Congreso, tomando iniciativa y peor aún dictando leyes o corrigiendo leyes en el Congreso de la República. Esa es la majestad del poder, esa es la acción que debe guardar un verdadero demócrata, y le reconozco y le aplaudo hoy desde esta tribuna, a pesar de que ya lo ha hecho la historia, al doctor Rodrigo Borja Cevallos. Pero entrando en materia, señor Presidente, señores asambleistas, en el tema jurisdiccional sí quiero tocar dos aspectos fundamentales: el primero, de reflexión profunda. Hace varios días este informe vino acá al Pleno, y realmente, me quedé sorprendido, pero sorprendido para bien, de que era el primer informe que se presentaba en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, firmado por todos los miembros de la Mesa; es decir, era

un informe de consenso, aprobado en la Mesa, por unanimidad. Y eso daba cuenta de que se puede convcrsar, de que se puede construir, de que pueden hacerse puentes, tener acuerdos, no importa de qué tendencia sean los actores de la política, para hacer una buena Constitución. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con perdón, Asambleista, creo que hay punto de orden de su coidearia que está adelante. Hable compañera.----------

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE MARÍA CRISTINA. Moción de información, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de información.----------

LA ASAMBLEÍSTA KRONFLE MARIA CRISTINA. La Mesa número uno, cuando trajo a primer debate los Principios de Aplicación e Interpretación, fue un informe de consenso también. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Así es, muchas gracias por la observación. Hay varios conscnsos, asambleista Rohón, y hay que reconocerlos. ------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Gracias, señor Presidente. Me referia a este primer consenso en materia jurídica, que tiene que ver con la Función Jurisdiccional. Aplaudo los consensos, Presidente, es la única manera que podamos llevar adelante en esta Asamblea, un acuerdo de convivencia politica y democrática para el futuro del Ecuador. Pero hoy veo que hay disenso, ya no hay el consenso; es decir, que no hemos avanzado, hemos retrocedido. El acuerdo que fue unánime, hoy ya no existe y hay varias divergencias que ya claramente lo han explicado aquí distintos asambleistas. Yo quiero hacer mención a

lo que ocurrió semanas atrás, cuando se aprobaron los artículos de la Mesa Dos, que tiene que ver con la Función Electoral, donde lamentablemente no se aprobó la independencia, mejor dicho, no se aprobó preservar la unidad jurisdiccional, y se aprobó la Corte Electoral, el Contencioso Electoral. Y esto es lo que lleva seguramente el día de hoy a tener que acomodar el texto constitucional que se presentó hace varias semanas, donde si se preservaba la unidad jurisdiccional, por éste que hoy ya no lo hace. Y eso es lamentable, porque entonces se podría decir que el Ejecutivo también debería tener una Corte Ejecutiva, que el propio Legislativo debería tener una Corte Legislativa; que, sin duda, las cortes militares y policiales tendrían que preservarse, la nueva Función Electoral ya tiene su Corte Electoral. Y entonces hemos roto el principio básico determinante en un Estado, que es la Función Jurisdiccional, que es poner orden, que es tener una sola autoridad que dé justicia en el Ecuador. Eso hay que preservarlo, señor Presidente, señores asambleístas. Creo que es fundamental preservar la unidad jurisdiccional, si queremos poner orden en la administración de justicia en el Ecuador. La justicia es una sola, la administración de justicia es una sola y esa tiene que estar amparada y cobijada bajo esa unidad jurisdiccional. Y mire usted, que se agrega, después de lo que antes era un punto, que decía: "Ni las entidades de régimen seccional o autónomo podrán desempeñar funciones de administración de justicia". Ahí terminaba el artículo que fue aprobado por consenso hace varias semanas. Y ahora se agrega, con una coma, dando lugar a que no exista ya en el Ecuador una unidad jurisdiccional, la frase: -coma- ", sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos o autoridades". Es lamentable, señor Presidente, que ese precepto básico de la unidad jurisdiccional, que es fundamental para la adecuada administración de justicia, hoy lamentablemente...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta. -----

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN CÉSAR. Gracias, señor Presidente. Hoy lamentablemente se esté rompiendo. ¿O hay unidad jurisdiccional?, o ¿no hay unidad jurisdiccional? Así que lamentablemente, está en nuestras manos o, mejor dicho, está en nuestras manos guardar ese precepto de la unidad jurisdiccional y poner orden a la administración de justicia, que tanta falta le hace al Ecuador. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleista Hurtado, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. Gracias, señor Presidente. Compañeros, compañeras asambleístas: La justicia en el Ecuador, es una idea que viene a la mente de mucha gente en el país, cuando se enfrenta a la realidad de las Cortes, a la realidad de la Función Judicial. Cuando con frecuencia se me pregunta ¿si creo en la justicia del país? Por mi formación jurídica debo buscar formas para dar una respuesta positiva, mucho trabajo me cuesta. Cuando, como hijo de un dirigente asesinado, me preguntan ¿si creo en la justicia? Debo decir que no, que no creo en ella, porque tras nueve años de luchar por conseguirla, no lo hemos conseguido. Esa realidad que se repite con una vergonzosa frecuencia, es la que estamos llamados a revertir desde hoy que vamos a aprobar los primeros textos constitucionales en materia de justicia. Y estamos o deseamos sentar las bases de ese nuevo intento, de que haya justicia en el Ecuador. Estamos hablando de los principios que deben orientar la administración de justicia. Entonces es una nueva oportunidad, señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas, para devolverle al país la confianza en tan vital e importante función del Estado, incluso para la misma preservación de

la integridad nacional. Estamos debatiendo principios tan importantes, como independencia de la Función Judicial, la independencia de la justicia. Y de la lectura del texto de este principio, debemos inferir que se trata de la independencia de las demás funciones del Estado. Eso está absolutamente claro. Se trata entonces de preservar esa independencia, pero debemos ampliar esa independencia, también del poder económico, que ejerce una mayor influencia de la Función Judicial, que de la que puedan ejercer otras funciones del Estado o el mismo poder político en el Ecuador. Entonces esa dependencia que es evidente, cuando en el pasado reciente nos han avergonzado algunos magistrados de la actual, de la actual Función, de la actual Corte Suprema de Justicia, esos escándalos, insisto, que nos avergüenza, debemos buscar forma de que cada vez sean menos frecuentes y de ser posible desaparezcan. Entonces debemos articular un mecanismo de fiscalización y de control, para lograr ese objetivo. El órgano constitucional que actualmente está llamado a ejercer tales funciones, me refiero al Consejo Nacional de la Judicatura, está muy, muy lejos de cumplir ese objetivo. Según los propios agentes de justicia, lo que hacen es perseguir a los empleados judiciales, con o sin razón, y no resuelven los problemas de fondo que aquejan a la Función Judicial. Así que lo que debemos agregar aquí, es que sí, que la independencia, en articulación con el principio de autonomía, deben preservarse, por supuesto. Pero eso no significa que tengan patente de corso para hacer y deshacer. Debemos buscar un mecanismo de fiscalización, insisto, para avanzar, en la línea que inicialmente señalaba, de recuperar la confianza en la Función Judicial. La gratuidad, otro principio fundamental, para lograr que los pobres del país, sobre todo vuelvan a creer en la administración de justicia. Ha habido una realidad en el Ecuador, la realidad del abuso del derecho, el abuso del derecho de ejercer las acciones que se crean del caso para hacer valer un derecho.

Abuso del derecho, que llevó a establecer tasas judiciales para detener en algo ese abuso. Y me temo que el remedio resultó en algunos casos, peor que la enfermedad. Porque lo que logramos, y la práctica lo demuestra, es que mucha gente que no tenía la posibilidad de pagar treinta dólares, cincuenta dólares de tasa judicial, simplemente se quedaba sin justicia. Entonces debemos articular un mecanismo que nos permita lograr los dos objetivos: nos permita detener los abusos, pero sin detener la posibilidad de que los pobres accedan a la justicia. Es una tarca que a esta Asamblea le corresponde establecer en los textos que estamos por aprobar o los que aprobemos, eventualmente, también en esta misma línea. La publicidad de los procesos. Claro, los procesos son públicos y deben ser públicos. Pero ¿hasta dónde serán públicos? ¿Es posible que las cámaras de los medios de comunicación, o los demás medios de comunicación atestigüen procesos judiciales?, ¿que sean ellos, los jueces, que realmente juzguen o establezcan que una persona es culpable o inocente? Porque finalmente son o serían ellos los que establezcan ahí, con una intención a veces amarillista, que una persona es culpable o que es inocente, según los intereses, muchos casos, vulnerando el principio de inocencia, que es un principio, por supuesto, que también debemos defender. Entonces, manteniendo el principio de publicidad, o también impidiendo, insisto, que los jueces sean distintos de lo que la ley señala. En algo que aquí se ha dicho y con lo que concuerdo, por cierto, es que también los criterios de designación, los criterios de designación de los jueces, por supuesto en esto relacionado intimamente con la carrera judicial, de paso, también creo que cabría modificar estos dos últimos artículos propuestos por la Mesa, esos criterios que sirvieron para elegir a la "Corte ideal", -entre comillas- que tenemos hoy día, tienen que revisarse, y tienen que revisarse porque simplemente no han dado resultado en elegir los mejores hombres y las mejores mujeres para que integren el más alto

tribunal de justicia del país. Aquí da cuenta y se publicó en el Registro Oficial ciento ochenta y cinco del catorce de diciembre de dos mil cinco, se publicó la tabla de calificaciones de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En esa tabla de calificaciones, más de la mitad de los actuales magistrados tuvieron calificación deficiente, más de la mitad, deficiente, ninguno llegó a sobresaliente o muy buena, y solo dos tuvieron calificaciones ....----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta.------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENIN. Entonces demuestra eso, señor Presidente, que los mecanismos utilizados, de esa selección, son inadecuados, no dan resultado. Por lo que inclusive está en serio predicamento la legalidad, la justicia, de la integración de la Corte Suprema de Justicia. Y creo firmemente, que no es un despropósito hablar de sustitución, de que esta Asamblea, estableciendo también mecanismos de selección, ahí sí, de las mejores personas que integren esa Función Judicial, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los jueces de instancia, terminemos de una buena vez con la dependencia que aún existe en esa tan importante función del Estado, y podamos decir alguna vez en este país, que ya no solamente la justicia es para el de poncho, sino que será para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Concluyó su tiempo.----------

EL ASAMBLEÍSTA HURTADO LENÍN. Ese es el desafío que tenemos en esta Asamblea. Muchas gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Ortiz, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA ORTIZ ALFREDO. Gracias, señor Presidente. Colegas asambleístas: Yo creo que lo recogido por la Mesa respectiva que ha presentando el informe ya para el segundo debate, ha sido producto de varias observaciones, y de algunas observaciones que hemos realizado los asambleístas aquí en el Pleno, señor Presidente. Y creo que algunas de ellas han ayudado a mejorar sustancialmente estos articulados que hoy queremos dar paso para su respectiva aprobación. Pero en otros casos también, creo en lo particular, y basado en mis observaciones presentadas en el primer debate, que podrían estarse complicando para la ciudadanía que esta ávida de pedir que exista en el país, o de recibir de esta Asamblea una justicia verdadera, una justicia imparcial. Yo creo, colegas asambleístas, y me voy a referir, con el debido respeto, a los de la Mesa correspondiente, a su Presidente y a los demás colegas asambleístas, que ese Principio de Progresividad, con el que estamos trabajando en las Mesas, que ese Principio de Progresividad, con el que hay que elaborar esta Constitución, no debe perderse jamás, hacia allá tenemos que ir en la formulación y en la redacción de los articulados de esta nueva Constitución. No hay que ir para atrás, no tenemos que regresar para atrás como el cangrejo, porque prácticamente no estaríamos hablando de verdaderos cambios que queremos formular en esta Constitución. Y por eso invito a los colegas a ir hacia allá, hacia lo progresiva que tiene que ser esta Constitución. En algunos aspectos, como decía al inicio de la intervención, sí se recogen observaciones que tienden a que los artículos sean progresistas, sean progresivos, perdón, y vayan tendiendo a ese principio que he mencionado. En el tema de la unidad jurisdiccional, estimado Presidente, colegas asambleístas, creo que hemos ido tratando de mejorarlo, tratando de buscar esa unidad jurisdiccional que queremos implantar y que ya fue en algún momento implantada en la Constitución del noventa y ocho, nos hemos quedado un poco cortos en ser más progresivos, en ir más hacia delante, en

verdaderamente instaurar en este país una verdadera, -y discúlpenme la redundancia- unidad jurisdiccional, como tiene o como debió haberse dado ya hace diez años, cuando se instituyó en la Constitución del noventa y ocho. Este aumento, en este artículo que está en pantalla, puede crear o puede dar sinónimos de que estamos retrocediendo más bien en no construir esa unidad jurisdiccional que tanto hemos venido defendiendo desde las Mesas de trabajo y hoy aquí en el Pleno. Pero lo que me llama la atención, Presidente, y lo que he compartido con el Presidente de la Mesa, hace algunos minutos, es un tema fundamental que la colega Queirolo también lo menciona en su documento por escrito, y es el principio fundamental de la impugnación. Si bien es cierto, y estamos leyendo como estamos leyendo el artículo, y dice que: "...la unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad de las restantes funciones y organismos del Estado, ni de las entidades del régimen seccional autónomo podrán desempeñar funciones de administración de justicia", ¿qué pasa con las entidades y las instituciones que administran justicia a través de resoluciones administrativas, Presidente? Yo creo que ese es un tema que no hay que tomarlo tan a la ligera. Hay entidades en el país, que administran justicia a través de resoluciones administrativas. Y en mis observaciones habia propuesto que ni siquiera se dé vía resoluciones administrativas, este tipo de impartir o este sistema de impartir justicia en el país. Pero si por último, colega Presidente y colegas asambleístas, se lo quiere instaurar así, no puede perderse el principio, y por eso decía que hay que ser progresivos, el principio establecido en el articulo ciento noventa y seis de la Constitución vigente. Ahí se estableció un principio fundamental, que es el principio de poder impugnar cualquier situación de injusticia que se pueda dar en estas resoluciones administrativas. Si nos referimos textualmente a lo que le dice el articulo ciento noventa y seis de la Constitución, había para los ciudadanos, un principio de poder

impugnar resoluciones administrativas, cuando son injustas, cuando determinan que han ido por encima del órgano jurisdiccional y que han impartido justicia. Ese principio, Presidente, no se establece aqui, y si no lo vamos a establecer como un principio, por eso había que poner, y entre mis observaciones había mencionado, que después de donde dice "administración de justicia", debería haberse puesto "ni mediante resoluciones administrativas". Pero parece que esto en la Mesa, Presidente, no ha tenido el consenso necesario y está bien, esa es la democracia, pero no pongamos a la sociedad en una total indefensión, Presidente. Yo apelo a la sensibilidad de los colegas de la Mesa, de que tratemos de mejorar esa redacción, y si no lo podemos hacer allí para no, o para permitir que siga habiendo, porque tal parece que el consenso de la Mesa es permitir que siga habiendo entidades que via resoluciones administrativas, impartan justicia en el país. Si es así, si ese es el principio, Presidente, esta bien, aceptémoslo como tal, pero pongamos otro especialísimo dentro de este articulado que nos han presentado, que tiene que ser el principio de la impugnación. No podemos dejar en esa indefensión a la ciudadanía, porque mañana a cualquier persona, via resolución administrativa, le implantan una sanción o le implantan una sanción, cualquiera que ésta sea, pecuniaria o de suspensión de su actividad, productiva, como sea, como hay entidades como PETROECUADOR, como el Ministerio del Ambiente, como el Parque Nacional, todas imparten justicia vía resolución administrativa, Presidente. Pero si una de esas es injusta, ¿a quién vamos a apelar o a impugnar, si no se está dejando ese principio establecido de la impugnación? Por eso es que, a pesar, como decía, de ser progresivos en algunos aspectos, nos estamos quedando cortos en otros, colcga Presidente. Tratemos de que este principio, que va a ser fundamental para el pais, que a pesar de que no hemos coincidido en que se establezca una sola unidad jurisdiccional, y que a pesar de que

qucremos que sigan habiendo instituciones que hagan justicia a través de resoluciones administrativas, a pesar de eso, dennos el derecho a los ciudadanos, de impugnar esas resoluciones administrativas, como lo establece el artículo ciento noventa y seis de la actual Constitución vigente. Cuidado no dejamos este derecho en la Constitución, y vamos a vernos sometidos todos a este tipo de actitudes injustas, arbitrarias a veces, por parte de entidades que hacen de juez y parte.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, señor Asambleista.----------

EL ASAMBLEÍSTA ORTIZ ALFREDO. Culmino, señor Presidente, apelando a los colegas de la Mesa, no votemos este artículo tal como está, o si lo vamos a hacer, pongamos otro artículo que establezca el principio de la impugnación, para que no haya indefensión en los ciudadanos. Gracias, Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Guamangate, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE GILBERTO. Muchisimas gracias, compañero Presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras asamblcístas. En realidad quiero empezar mi intervención saludando ese trabajo dedicado, decidido que han hecho los compañeros de la Mesa respectiva. Tengo que también empezar saludando, ya que en días anteriores, el primero de mayo me parece, también la Mesa ya aprobó efectivamente reconocer la jurisdicción indígena para este nuevo texto constitucional. En ese contexto, me parece muy coherente, compañero Presidente y compañeros asambleístas, en el artículo innumerado, donde se dice: "Se establece la unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad de las restantes funciones y organismos del Estado, ni de las entidades de régimen seccional o autónomo podrán desempeñar funciones de

administración de justicia, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos o autoridades". Entiendo que este principio nos permite trabajar en coordinación, a estas dos jurisdicciones, tanto a la jurisdicción, que ya ha sido aprobado por la Mesa correspondiente, en este caso la jurisdicción indígena, como también la jurisdicción ordinaria. Saludo, agradecemos a nombre de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. También tengo que agradecer públicamente a nuestro compañero Vicente Masaquiza, que forma parte de esta Mesa Constituyente, que está trabajando y que es consecuente con la lucha de los pueblos y nacionalidades. Así mismo, compañero Presidente, es importante resaltar el articulo innumerado, en lo que manifiesta respecto a: "La administración de justicia es gratuita en todas sus materias e instancias, salvo los procesos de materia tributaria, mercantil y civil con excepción de aquellas relacionadas a los temas de familia". Compañero Presidente y compañeros asambleístas, para entender la ley no creo que necesariamente hace necesario ser abogado, solamente es de sentido común. Hasta ahora la justicia en el Ecuador o, más bien dicho, para que haya justicia en el Ecuador, hemos tenido que cancelar, nuestra gente ha tenido que esperar, y no ha sido de verdad, como se ha querido, una justicia verdadera. Eso podría dar lamentablemente, esta palabra "salvo" podría dar, ¿no cierto?, apertura a que la justicia en el Ecuador se siga manejando como se ha seguido haciendo hasta esta fecha. Por eso yo sí quiero, compañero Presidente y compañeros asambleístas, en esta noche, decir frontalmente, que hace necesario, estas acciones que se están indicando en los articulados correspondientes, nos van a permitir para que en el futuro tengamos una justicia verdadera. Pero también hace necesario que de manera inmediata, de manera inmediata se comience a hacer justicia en el Ecuador. Me parece que existe una propuesta de algún compañero

Asambleísta de esta Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido de reestructurar, y ahi nosotros queremos sumar de manera total, compañero Presidente, de manera total, a los representantes de los organismos dc justicia. Porque por demás conocemos y conoce la sociedad en general, que esto jurídicamente sus representantes no fueron nombrados de acuerdo a la Constitución o a la norma vigente actual. Ellos fueron nombrados, como ya sabemos todos, a través de una Comisión que, a mi modo de ver y a nuestro parecer, compañero Presidente, ha dejado mucho que desear. Y ahí nosotros hacemos un llamado, además que esta justicia, desde cuando se nombraron a sus representantes hasta la presente fecha, no han dejado de ser lentas, siguen siendo lentas, no se ha garantizado su transparencia, peor agilidad. Existen casos de juicios que han pasado por uno, dos, tres años, cuatro, siguen ahí, compañero Presidente. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hoy que esta Asamblea tiene la potestad, el carácter de los plenos poderes, pues efectivamente hace necesario que a través de un Mandato, no sé, se pueda reestructurar de manera total a sus representantes, para que de esta manera se pueda por fin verificar de manera inmediata, ya la justicia en el Ecuador. Muchísimas gracias, compañero Presidente, muchísimas gracias, compañeros asambleístas. Creo que por fin, creo que por fin se comienza a reflejar acciones de un Estado que venimos proponiendo, un Estado plurinacional, y por eso nuestro respaldo a usted, compañero Presidente de la Asamblea. Nuestro respaldo a los compañeros asambleistas del Movimiento PAIS, que piensan de manera progresista, no están pensando dc manera individualista ni tampoco están pensando en acciones que de pronto tal vez vayan para un sector, sino para todos los sectores que contemplamos, de manera general para los ecuatorianos de este pais. Eso, de manera particular y puntual. Yo creo que a futuro vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando, pero por sobre todas las

cosas, vamos a seguir saludando iniciativas, no como decía algún compañero asambleista. Yo creo que, por demasiado claro está que los articulados no permiten un retroceso, más bien nos permiten un adelanto. Por eso mi saludo, una vez más, y muchísimas gracias compañero Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Hernández. Luis Hernández, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ LUIS. Señor Presidente, señoras, señores asambleístas: Como una experiencia personal recuerdo, hace unos, ya estaba en la Asamblea y me fui a Guayaquil, y le pedía al taxista que me lleve, tenía una entrevista en una estación de televisión, y le pedí que ponga el taxímetro, no quería hacerlo, me decía que hay una tarifa que es fija. Yo le dije: no importa, póngale el taxímetro porque esa es la ley, y no quería poner. Entonces le dije que no iba a tomar el taxi, porque yo tenía que hacer respetar la ley, y le dije que le iba a pagar algo más de lo que salía en el taxímetro; y en el camino me dijo: yo me moriré sin que vea que la ley es para todos. Y era un hombre joven, era más joven que yo, que ya es bastante. Entonces eso es como viven muchos ecuatorianos. Porque la ley es, como se dice vulgarmente, y con las disculpas del caso, para los de poncho. Y aquí tenemos un ejemplo, la Constitución anterior habló de la unidad jurisdiccional. Han pasado diez años, diez años, y ahora la volvemos a poner ahí. ¿Esperaremos diez años más? Entonces mucho tiene que ver las actitudes. Y una cosa que dijo y que nos hace meditar, nuestro compañero Fernando Vega, lo que más rebela a una sociedad, es la injusticia. Porque una sociedad que es pobre, sin justificarla, sabe que de alguna manera puede, trabajando, haciendo un buen negocio, educándose, puede mejorar. Pero si una sociedad no tiene justicia, la

socicdad se rebela, y de eso hay ejemplos en la historia, miles de ejemplos. Se rebelan aquellos que saben que no hay otra salida, sino la rebelión, las armas, porque no hay un sistema de justicia. Volviendo al tema que nos compete, yo sí tengo unas pequeñas dudas, pero ya pasarían a ser de forma, depende cómo las interpretemos, y yo sí pienso que en lugar de principios, son de alguna manera, características, características. Por ejemplo, la independencia, es una característica, creo yo; la naturaleza, yo pienso que es una característica; la autonomía, es una característica; la unidad jurisdiccional, ya pasaría a ser un principio. Esto lo dejo para la reflexión y para los futuros articulados. La publicidad puede ser un principio, la oralidad es un principio. Entonces yo creo que las características nos dicen el cómo es, el cómo es. Y el principio es, qué es lo que vamos hacer, qué es lo que tiene que hacerse. Es por eso que yo digo, en qué lugares vamos a insertar por ejemplo la obligatoriedad. Es decir, que ningún juez puede dejar de ejercer autoridad aduciendo que no hay una ley. ¿En qué momento le ponemos ese principio, la obligatoriedad? ¿En qué momento, por ejemplo, le ponemos un principio de administración de justicia, que es el debido proceso?, ¿en qué parte le ponemos ese principio? O sea, igualmente, ¿en qué parte le ponemos el principio de la indemnización? Una persona que ha tenido que recurrir a ingentes recursos de dinero, y que después ha ganado el juicio y el Estado no le devuelve nada, principio de la indemnización, en los errores judiciales, por supuesto. Otro principio que me parece que, en qué momento lo vamos a colocar, el principio de no ser condenado en ausencia, el principio de no ser condenado en ausencia. Y también, ¿en qué momento vamos a poner el principio que la ley tiene que aplicarse de manera que sea más favorable para el procesado?, ¿en qué momento vamos a colocar ese principio? Yo sí pienso, para concluir, que aquí el Ecuador, la nación ecuatoriana tiene un saldo en contra, tiene un saldo

en contra con la justicia. Examinemos solamente a nuestro entorno regional, y tenemos en la cárcel a ministros, a diputados, a senadores, a militares de alto rango, a policías de alto rango; sin embargo, en el Ecuador: ocho mil millones de feriado bancario, corrupción del más alto nivel, y tenemos, al que se dice vulgarmente, se ha robado una gallina. Eso no puede continuar en el Ecuador. Pero, como dije anteriormente, si no cambian las actitudes estaremos diez años más tarde, diciendo ¿por que no aplicamos lo que ahora aprobamos? Muchas gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gracia, por favor.----------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Gracias, señor Presidente. En verdad, como integrante de esta Mesa, hemos hecho un trabajo bastante fructífero y socializado. Estamos conscientes, colega Presidente y colegas asambleístas, que no hemos descubierto el agua tibia, en los diez primeros artículos, de los principios del nuevo sistema judicial, que hemos elaborado, y en eso estamos muy claros. A tal punto que algunos artículos dc la Constitución Política vigente, que no es mala, que no es mala, porque tiene cosas muy importantes, pero que desgraciadamente nunca se pusieron en práctica, producto de que no se elaboraron esas leyes secundarias o supletorias. De allí que reconocer lo bueno de las personas, es parte justamente de la valentía y la honorabilidad de las personas. Eso es lo que hemos hccho en la Mesa, colega Presidente, estamos de acuerdo que no hemos descubierto el agua tibia, y que mucho de lo que está aquí ya está en la Constitución pasada; pero esto es lo que tenemos que hacer, reconocer lo bueno que tiene al momento la Constitución Política, y cubrir aquellas falencias que sí tiene también la Constitución Política vigente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con perdón, un momento, compañero Asambleísta. Yo les pediría al resto de asambleístas, que se dignen escuchar y al menos no interrumpir lo que está presentado el otro compañero.----------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Gracias, señor Presidente, era hora. Mire, dentro de lo que hemos considerado los principios de esta nueva Constitución Politica que estamos elaborando, hemos tomado en cuenta algunas cosas de la Constitución Política vigente, y dentro de ellos está la gratuidad, porque la justicia debe ser gratis para los pobres, para que los que no tienen cómo acceder a la justicia. Yo tampoco estoy de acuerdo, que aquellos que sí tienen cómo pagar, el Estado tenga que subsidiarle esos gastos. Ahí no vamos a coincidir. Es como después, con el paso del tiempo, también tenemos que ir viendo cómo se va regulando el uso del gas, que tanto el hombre que vive en la Isla Trinitaria o en la Isla Piedad, en Esmeraldas, como vivo yo o viví en mi infancia, paga lo mismo por un tanque de gas, que aquellos que tiene piscina para calentar el agua, o como aquellos que llegan y llenan con el agua potable su piscina para bañarse, y el pueblo que está en los barrios suburbanos paga el mismo metro, la misma cantidad de dinero por el metro cúbico. Entonces tenemos que ir regulando todo eso, señor Presidente y colegas asambleístas. La justicia tiene que ser gratuita, pero para los pobres. Los que sí tienen cómo pagar, tienen que pagar, eso esta claro. El asunto de la publicidad, que también está en la Constitución Política vigente, fue considerado por nosotros, ¿por qué? Porque la colectividad tiene derecho a saber lo que sucede en el sistema judicial. Lo que no podemos dejar a la libre decisión, es que sean publicados y sean manipulados por los medios de comunicación, porque eso induciría, induciría a la conciencia ciudadana. Por eso nosotros, muy claros, ponemos en el articulo que dice lo siguiente: "Los

juicios, en todas sus etapas y las resoluciones serán públicos, salvo los casos y regulaciones expresamente señalados en la ley". ¿Por qué pusimos esta parte?, Porque si nosotros dejamos que medios de comunicación le den publicidad, a veces se manipula la conciencia ciudadana, y eso no lo podemos permitir. En lo que tiene que ver con la oralidad, claro que está bien, sí es verdad, no hemos descubierto el agua tibia, porque ya está en esta Constitución Política vigente, pero nunca se puso en práctica, y eso es bueno, la oralidad, la oralidad es buena, le va a dar transparencia al proceso judicial, le va a dar celeridad al proceso judicial. Y ¿quién gana con todo esto?, Gana el hombre y la mujer que, por desgracia busca justicia. ¿Por qué por desgracia? Porque desafortunadamente, sí, cuando vamos al sistema judicial, es a reclamar un derecho como víctima, que con seguridad ninguno de nosotros, ningún ser humano quiere estar inmerso dentro de esa práctica. Entonces, miren ustedes, dentro de la forma de ir mejorando el nuevo marco jurídico que necesita el país, hemos incluido el criterio de designación, porque creemos que el criterio con el que se ha manejado no es el más adecuado, pues, no es el más adecuado. ¿Qué hemos tenido? A instituciones políticas designando instituciones netamente jurídicas, pues; eso no puede seguir dándose. Igualmente con el asunto del criterio de la carrera profesional. Entonces, señor Presidente y señores asambleístas, nosotros, en la Mesa ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho mantener un compromiso moral y social que tenemos los ciento treinta asambleístas, con la colectividad. Y el espíritu de estos principios es el que nos lleva a estar claramente convencidos que hemos hecho lo mejor y que estamos interpretando la verdadera necesidad que el pueblo quiere, en justicia, y estamos cubriendo esas falencias que tiene el sistema judicial vigente. Claro que preocupa también, señor Presidente y colegas asambleístas, que en las leyes secundarias o en las leyes supletorias, como se llaman también,

no se interprete el espíritu de la norma constitucional, y allí eso que estamos elaborando hoy, va a quedar en la nada si es que no nos preocupamos de que en verdad la ley reglamentaria o supletoria o secundaria, en realidad interprete, sí, el espíritu de la norma constitucional. Cuando eso se logre, estaremos cerrando el candado que ahora sí, herramientas legales vayan en beneficio de la colectividad. Yo, en verdad, señor Presidente, me ratifico en todo el informe. Si bien es cierto, no consta mi firma en el informe de mayoría, es porque la semana pasada, como es de conocimiento de usted, señor Presidente y de colegas asambleístas, tuve una calamidad doméstica en mi provincia, un problema familiar; pero me he ratificado, porque conozco bien el espíritu que nos mueve en la Mesa, y está justamente la petición a la Presidencia, de ratificarme en el informe de mayoría hecho por nuestra Mesa. Señor Presidente e colegas asambleístas, los integrantes de la Mesa número Ocho de Acceso a la Justicia y Lucha contra la Corrupción, estamos fielmente convencidos de que hemos elaborado los principios de ese nuevo marco jurídico del sistema judicial que necesita la sociedad ecuatoriana para mejores días, que necesita la sociedad ecuatoriana, para que de una vez por todas la justicia, el pueblo tenga acceso a la justicia. Y partiendo de esa convicción, creemos que estamos actuando bien y sobre todo... ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, señor Asambleísta. ----------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Gracias, colega Presidente... y sobre todo, comprometidos con los altos intereses de la patria. Porque esta honorable Asamblea, lo único que no debe perder, señor Presidente, colegas asambleístas, es el elevado compromiso moral y social con la colectividad, y aquí eso debemos mantener hasta el último minuto de funcionamiento de esta Asamblea. Gracias, señor Presidente, señores

asambleístas.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Mendoza, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA MANUEL. Gracias, señor Presidente. Colegas asambleístas: Hablar de la administración de justicia, de la Función Judicial, es hablar de corrupción, es hablar de indignidad, es hablar de maltrato, de abuso. Todos estos calificativos, señor Presidente y colegas asambleístas, finalmente resultan pequeños frente a toda la corruptela que envuelve a la administración de justicia en nuestro país, que los colegas asambleístas de manera adecuada, fundamentada y amplia han señalado, por lo cual no me voy a detener mucho en insistir en esta parte. Pero también tengo que ser justo y no generalizar, y es indudable que hay honrosas excepciones de jueces y de empleados judiciales, que de alguna forma han sido consecuentes y se han ajustado a la ley, al derecho y a la sana crítica, para actuar y resolver en lo que corresponde. Pero quiero aprovechar, señor Presidente, ciudadanos y ciudadanas que me escuchan, que en el juicio que siguen treinta mil indígenas y campesinos del Norte de la Amazonía, de mi provincia de Sucumbíos y la hermana provincia de Orellana, contra una transnacional como es la empresa Chevrón, antes Texaco, se han dado eventos, hechos que vale la pena recoger, señor Presidente. La última denuncia que me ha llegado, en el sentido que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia habría llamado a su despacho a ministros jueces de la Corte Superior de Justicia...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Compañero, disculpe que le interrumpa. El tema es muy importante, pero no viene al punto del Orden del Día. Así que, le rogaría concentrarse en lo que estamos tratando, hágame conocer esa información y si es preciso tomaremos las acciones

correspondientes. ----------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA MANUEL. Con todo respeto, señor Presidente, tiene relación directa porque estamos tratando los principios de la justicia, y resulta que es un hecho público que vale la pena señalarlo. Sin embargo, avanzando en la temática, a propósito de las inequidades y de la injusticia en nuestro país, señor Presidente, sí es oportuno también hacer referencia a los sueldos dorados de los ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia, contradictoriamente con lo que perciben los profesores juridicados del país, que tienen un bono de miseria, de ciento cincuenta dólares, sin posibilidad a ningún beneficio de ley. No obstante a lo anterior, y remitiéndome a la propuesta del articulado, en lo que respecta a la unidad jurisdiccional, y que ninguna de las demás funciones del Estado podrán administrar justicia, con la excepción de conceder esta potestad a otros órganos o autoridades, de alguna forma es contradictoria, porque al haberse aprobado en segundo debate los textos constitucionales, de la Función Electoral, que comprende al Tribunal Contencioso Electoral, con capacidad de administrar justicia, se violó este principio de la unidad jurisdiccional, y so pretexto de no perjudicar el conceder esta potestad a otros órganos, entre ellos a la Función Electoral, se está violentando el principio de la independencia y unidad jurisdiccional al que hago referencia. Por lo cual deberíamos reflexionar, ¿si es independiente para administrar justicia o no? En todo caso, me permito sugerir se excluya la última parte del artículo propuesto, en la parte que hace referencia, dice: "sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos o autoridades". Con este texto alternativo, se salvaría las contradicciones incurridas con los textos ya aprobados; pues, caso contrario, de mantenerse la propuesta tal como está concebida, estaríamos facultando constitucionalmente a la

administración estatal para que juzgue, sea a título de jurisdicción delegada o dividida, mediante los caducos juzgados, ya contemplado en ciertas leyes, entre ellos, el Director Nacional de Obras Públicas, como Juez Nacional de Caminos, los jefes provinciales de Administración de Aguas de las agencias de INERHI, y del Consejo Consultivo de Aguas, el Inspector y Director Nacional de Pesca, las cortes Militar y Policial. Porque es precisamente por esta jurisdicción delegada o dividida, encargada de administrar justicia, que se han cometido sendas barbaridades jurídicas e impunidad en los delitos cometidos por personas que gozan justamente de este fuero. Respecto al artículo de la gratuidad de la justicia, en todas sus materias e instancias, considero que de igual forma, señor Presidente y colegas asambleístas, tenemos que tomar posición: o ¿la justicia en nuestro país es gratuita?, o ¿la mutilamos, la billeteamos y eso media? Me quedo con lo primero. En ese sentido, son precisamente los procesos tributarios, mercantiles y civiles los que mayor demanda tienen en la práctica diaria de los usuarios y, consecuentemente, los únicos servicios judiciales que serían gratuitos, son los procesos penales y los de familia, y los demás, todos deben ser pagados mediante las tasas judiciales respectivas. Entonces, ¿de qué gratuidad estamos hablando respecto a la administración de justicia? Inclusive a los casos de menores, niñez y adolescencia se les está imponiendo el pago de la tasa judicial, porque todos los operadores de justicia, conocemos, que los asuntos de familia se tramitan y juzgan de acuerdo a la Ley ciento tres, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, mediante la administración de justicia delegada en comisarías dependientes del Ministerio de Gobierno, y los asuntos de menores de edad se ventilan aparte en la Función Judicial, en los juzgados de la Niñez y la Adolescencia. Razón por la que al contemplarse...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta. -----

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA MANUEL. Gracias, señor Presidente. La propuesta tal como está concebida, se estaría dando lugar para que a estos casos de menores se les imponga el pago de una tasa judicial. Agradecer a los colegas de la Mesa, por haber incorporado algunas sugerencias que hicimos en el primer debate, como el artículo sobre la oralidad. Pero en ese sentido, señor Presidente, sugiero que se incorpore una Disposición Transitoria en la nueva Constitución, para que a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, dentro de un plazo prudente se implante el sistema oral procesal, en todas las materias, instancias, etapas y diligencias. Gracias, señor Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Cordero, por favor. ----------

EL ASAMBLEÍSTA CORDERO FERNANDO. Señor Presidente, señores asambleistas, compañeras asambleístas: Quiero insistir ante los compañeros de la Mesa Ocho, a más de reconocer su valiosísimo trabajo que creo que está sobre todo basado en principios que el Ecuador reclama a gritos durante mucho tiempo; pero me preocupa que pese a que se enuncia algo, después, por las razones que nos han explicado sus integrantes y otros compañeros asambleístas, el concepto de la gratuidad se diluye o se restringe. Yo les invitaría a que todos estos casos que ustedes han señalado como no deseables de que sean gratuitos, más bien reflexionemos desde el lado económico. Es decir, el imponerle la tasa y restringirle el acceso a la justicia a todos los casos que aquí se han comentado, se traduce económicamente en las cifras que ustedes están viendo ahí, no están muy claras las fotografías, pero en números, significa para el año dos mil siete o para el promedio del período dos mil cuatro –dos mil siete, la Función Jurisdiccional, como todavía le seguimos llamando, recibió en total un ingreso de ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos treinta y un mil dólares, en cifras

redondas. De eso, el noventa y seis por ciento son asignaciones del Estado, y las tasas representan apenas el cuatro por ciento. Estamos sacrificando la gratuidad, por un cuatro por ciento de ingresos. Me parece que realmente estamos perdiendo lo más por lo menos. Me parece que a esas personas que mal usan la justicia haciendo, como decía la compañera Betty Amores, veinte demandas, gastando tiempo de los jueces, distrayendo a la justicia, tratando de justamente evadir la justicia, me parece que hay que buscar otras formas de castigarles, alguna forma de evitar que eso se dé, pero no castigando a los inocentes que buscan justicia gratuita, sólida, urgente y oportuna. Gracias, Presidente.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, asambleísta Cordero. Asambleísta De la Torre, por favor. ----------

LA ASAMBLEÍSTA DE LA TORRE ROSA ELENA. Gracias, señor Presidente. Durante el trabajo de la Mesa de Justicia, en más de una ocasión y hasta hace poco tiempo habíamos escuchado la frase de alguno de los compañeros, diciendo que el tema de justicia es un tema en el que no habría que innovar, porque la justicia es una de las cosas que mejor ha funcionado en estos diez años. Creo que después de lo que hemos escuchado de cada uno de los compañeros y compañeras esta tarde, refiriéndose al tema de justicia, nos queda claro que no es así, es todo lo contrario. Hay un viejo dicho popular que dice: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Yo diría, en este caso, parafraseando ese dicho: "Dime a quién juzgas y te diré quién eres". En el caso ecuatoriano, "la justicia ecuatoriana -digamos, tradicionalmente se ha escuchado también con otro dicho- es para el de poncho". Tradicionalmente, la justicia ecuatoriana ha juzgado a los que han sido excluidos por el mismo sistema político del que es parte esta justicia; y

por otro lado, ha negado el acceso a exigir y a reclamar a esos mismos excluidos y marginados de este sistema. En este sentido, me alegro que esas voces de pensar que la justicia debe quedarse como está, ya hayan desaparecido, y quiero agradecer y felicitar a todos los compañeros de la Asamblea por su participación, porque muchas veces se piensa que este es un tema técnico y es un tema que mayores implicaciones tiene sobre la vida y sobre el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas en el país. Yo quisiera un poco tratar de explicar el porqué la Mesa ha tomado esta decisión de llamar "jurisdiccional". Quisiera entrar a tratar rápidamente el tema de la unidad jurisdiccional. Tradicionalmente, la única justicia que ha sido reconocida por el Estado, ha sido la justicia ordinaria, la que hemos conocido como Función Judicial, en el caso ecuatoriano. Esta Función Jurisdiccional, digamos, esta Función Judicial, con todas las, limitaciones que se han señalado en esta tarde, y bajo la cabeza de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Constituyente, con este compromiso con el cambio, ha ido identificando otros temas que requieren una participación directa y oportuna de una administración de justicia de otra naturaleza, de la administración de justicia de esta Función Judicial. Y así se ha identificado y se ha aprobado el Tribunal de lo Contencioso Electoral dentro de esta Función Electoral, tan necesaria. Por otro lado, estamos frente al reto de aprobar una Corte Constitucional e ir a una verdadera justicia constitucional, que garantice lo que estamos trabajando y aprobando en estos meses, y que tanto interés tiene el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, en la Constitución del noventa y ocho se aprobó la justicia indígena, y en la Mesa de Justicia, como ya lo señaló alguno de los compañeros, ya hemos elaborado un artículo que se refiere al tema de la justicia indígena, haciendo este debido reconocimiento y este necesario e histórico reconocimiento. Por otro lado, tenemos dentro de la práctica ecuatoriana, la mediación y el arbitraje, otros medios

alternativos de solución de conflictos, pero también tenemos la justicia de paz que se busca sea desarrollada para el futuro y cualquier otro medio de solución de conflictos que se pueda ir innovando. En este sentido, digamos, la Asamblea Constituyente ya no está hablando solamente de una justicia, de esa justicia tradicional de la Función Judicial a la que todos hemos estado acostumbrados, sino que estamos hablando de otras justicias. Estamos hablando entonces de la justicia constitucional, reitero, de la justicia electoral, de la justicia indígena, de otras jurisdicciones o entidades. En ese sentido, la Mesa ha considerado que el tema de unidad jurisdiccional ya no es aplicable, hay una relativización de ese término, por estas nuevas consideraciones. Sin embargo lo hemos mantenido como aplicable dentro de lo que es la justicia ordinaria, o se podría aplicar dentro de lo que es la justicia ordinaria. Es decir, no se rompe, se relativiza este principio, pero no es aplicable para las otras justicias que tienen otra naturaleza. En este sentido, ha sido redactado y discutido el tema dentro de la Mesa Ocho. Aquí entramos a otro tema que es importante, que tiene que ver con el tema de la Función Judicial o Función Jurisdiccional. Nosotros hemos decidido el término Función Jurisdiccional, porque jurisdicción es la potestad de administrar justicia, y pensamos que dentro de ese paraguas de Función Jurisdiccional podrían entrar todas estas justicias, pero que ya no tienen una sola cabeza, estamos hablando de cuatro o cinco cabezas dentro de las cuales la justicia ordinaria sería una más. Para que exista, como decía antes, la unidad jurisdiccional, hacía falta una sola cabeza. Dentro del concepto de unidad jurisdiccional, si nos quedan retos que son importantes; es decir, dentro de la unidad frente a esa justicia ordinaria o Función Judicial, si la queremos llamar así, nos queda todavía integrar a la justicia policial, a la justicia militar, lo contencioso administrativo. Creo que este reto de lo policial y lo militar es un reto que también ha sido aceptado ya desde

las Fuerzas. Hemos recibido dentro de la Mesa Ocho, la visita de los Altos Mandos Militares y Policiales, también con la aceptación de esa propuesta, y este sí es un reto, porque aunque en la Constitución del noventa y ocho lo teníamos, tenemos que impulsarlo hasta que se haga realidad. En cuanto a la denominación de Jurisdiccional o Judicial, nosotros lo hemos llamado Jurisdiccional, porque además de los órganos que están dentro de la Corte Suprema de Justicia, las instancias dentro de Corte Suprema de Justicia, tenemos o podemos hablar de organismos u órganos autónomos, como son la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que se está creando; los órganos administrativos o de Gobierno, Consejo de la Judicatura y Consejo de Rehabilitación Social y órganos auxiliares, notarios y registradores de la propiedad. Entonces es por eso que se ha mantenido el término de Jurisdiccional. Con respecto a la gratuidad de la justicia, la Mesa Ocho ha acogido, bueno, el criterio que el compañero Cordero ha expresado, en el sentido de que es necesaria la gratuidad de la justicia, como un principio, además. Pero habíamos hecho la excepción de lo mercantil y de lo civil que, entiendo volverá a ser considerado por la Mesa, pero no habíamos olvidado la necesidad de que la justicia sea gratuita. Más bien se ponían excepciones, considerando que la mayoría de juicios, en los casos mercantiles, civiles no tienen que ver con derechos fundamentales y que vendrían a ser más o menos una suerte de cobranzas, de bancos, de compañías, etcétera. Bueno, yo simplemente quería terminar diciendo que estoy muy contenta de que en esta Asamblea Constituyente hayamos superado esta frase que dentro de las familias quiteñas, y entiendo que a ustedes les sonará común, esta frase de "siempre hemos sido así", que seguramente hemos escuchado cuando éramos chiquitos, cuando pretendíamos innovar o cambiar. Creo que es el tiempo en que tenemos que ser mejores, y en ese sentido, quiero felicitarles y agradecerles por su trabajo. Gracias, señor Presidente. -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Vamos a hacer una pausa para ir a tomarnos un café, y regresamos en media hora. Diez para las ocho, nos encontramos acá.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE SUSPENDE LA SESIÓN A LAS DIECINUEVE HORAS VEINTE MINUTOS. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a continuar con la sesión, ya estamos en la hora prevista. Les invitaría a retornar a la sesión para poder continuar. Señor Secretario, creo que ahora sí tenemos quórum. Nos falta muy poco para completar el quórum, tenemos que continuar con la sesión. Tenemos dos personas más inscritas y está cerrado el debate... (vacío de grabación). ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN A LAS DIECINUEVE HORAS CINCUENTA MINUTOS. ----------

EL ASAMBLEÍSTA LARA ANTONIO. Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros asambleístas: El pensador argentino José Ingenieros, enseñó que: "La justicia tiene un valor superior ante la ley, que acatar una ley es un acto de disciplina, pero las leyes a veces son injustas y acatarlas implica una inmoralidad, mientras que respetar la justicia es un deber de la persona digna, aunque para ello tenga que llevarse sobre las imperfecciones de la ley. La perfectibilidad social -enseñaba Ingenieros- se traduce en aumento de justicia en las relaciones entre los seres humanos, pues la justicia tiende a orientar la estimación hacia la virtud, el bienestar, hacia el trabajo, la honra, hacia el mérito, y es por eso la cúspide imaginaria de la moralidad". Y un escritor y pensador ecuatoriano, en un momento trágico de la vida del país, dijo: "La más alta, la más bella, la más sublime de las aspiraciones

humanas está encarnada en la exaltación de la justicia, y solamente a ella pertenece el juzgamiento y la sanción, y solamente ella tiene que decirnos la palabra que redime o el veredicto que condena". Estas palabras las pronunció el doctor Pío Jaramillo Alvarado, en el dictamen fiscal mediante el cual formalmente acusó ante la historia al efímero y siniestro Gobierno de Carlos Freile Zaldumbide, por el abominable magnicidio cometido el veintiocho de enero de mil novecientos doce, contra el ecuatoriano más grande de todos los tiempos, contra el ilustre personaje, el Viejo Luchador ecuatoriano, don Eloy Alfaro y sus generales. No está demás señalar que en la impunidad de ese brutal y cobarde asesinato cometido con saña jamás registrada, cometido también con el auspicio de autoridades civiles, de militares corruptos, de una iglesia retrógrada y conservadora, marcó una mancha indeleble e ignominiosa en la vida de la República. Pues la justicia del Ecuador no fue capaz de sancionar a ninguno de los responsables, ni a los más insignificantes autores materiales, ni menos aún a los autores intelectuales. Es exacto afirmar que la impunidad de ese magnicidio representa un estigma no solo para la institucionalidad del país, en general, sino también para nuestra administración de justicia, en particular. Así, a la par que la inestabilidad y la falta de rumbos ha aquejado a los gobiernos nacionales, la administración de justicia se ha visto aquejada por la abierta o encubierta injerencia de los partidos políticos, de los gobiernos o de los poderes fácticos. Se ha visto aquejada por la corrupción, la ineficacia y la mediocridad, por la condición de botín político sujeto a reparto, y hasta por el crecimiento de una dirigencia gremial judicial que llegó a tener más poder que los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, imponiéndose inclusive en la designación de jueces, salpicada a veces con la venta, con la compra de espacios judiciales desde la alta magistratura hasta los distritos judiciales del país. En la experiencia que vivimos, señor

Presidente, en la provincia de Esmeraldas, una madrugada del treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, un piquete de policías enviado por el ministro Luis Robles Plaza, en el Gobierno de Febres-Cordero, escalaba los balcones y las paredes del domicilio de un Alcalde, y desde allí fue sacado y conducido al Penal García Moreno, en una madrugada oscura, para después de una semana de ese acto de barbarie, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, un tal Carlos Riofrio, legalizar la detención. He ahí la justicia. Y ¿qué hicieron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia? Pregunto a usted, pregunto a los asambleístas, a la patria y a la provincia de Esmeraldas que seguramente escucha mi intervención. La Corte Suprema de Justicia, respaldada por el Gobierno de turno, lo trasladó de la Presidencia del distrito judicial de Esmeraldas, a la Presidencia del distrito judicial de Loja. Ahí está la justicia. Esa justicia está en mora, en mora con la patria, y señor Presidente, por eso no es posible aceptar que la Presidencia de la Asamblea diga que no vamos a intervenir, con todo respeto, señor Presidente. Debemos intervenir donde el pueblo requiere, porque es el mandato de los ecuatorianos. Si hacemos una encuesta a lo largo y ancho de la patria, sobre la situación de la justicia, el pueblo responderá hay que hacerlo, asambleístas, porque no se puede continuar con procesos corruptos e inmorales. Por ello, señor Presidente, al concluir mi intervención en este histórico momento, quiero también saludar y felicitar a los compañeros de la Mesa Ocho, por el articulado que estamos examinando, y quiero apoyar, definitivamente, la gratuidad de la justicia. Quiero también apoyar el término de lo "jurisdiccional", y no como Función Judicial...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta. -----

EL ASAMBLEÍSTA LARA ANTONIO. Que quede como "Función Jurisdiccional", y no Función Judicial. Porque ello significa también que estamos rescatando lo que los romanos decían: la jurisdicción, es decir, el derecho. Ya, señor Presidente, muchas gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rodriguez. Con usted finalizamos. ----------

EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR. Señor Presidente, ciudadanas y ciudadanos asambleístas: En primer lugar, creo que es importantísimo remarcar el intenso y excelente trabajo de síntesis que han hecho los compañeros de la Mesa, que han recogido de manera sostenida, ordenada los aportes que todos los asambleístas hemos hecho. En particular, sobre este tema yo siento que ha habido una posición receptiva a las observaciones que enviáramos el veintidós de abril, que se han incorporado en los textos. Hay un tema que sigue siendo materia de debate y que en el caso de la observación que planteáramos, decíamos para justificar, para justificar que la potestad de administrar justicia emana de soberanía popular expresada en las leyes y ejercida por los órganos de la Función Jurisdiccional, habíamos planteado que sea "Función Judicial", en razón de que el poder de administrar justicia debe ser denominado en la Constitución, como "Función Judicial" y no Función Jurisdiccional. Porque jurisdicción es una potestad pública asignada por la ley a un juez, persona o tribunal para juzgar o ejecutar lo juzgado. En consecuencia, jurisdicción es lo que pertenece o es relativo a la jurisdicción. Y judicial, en cambio es lo relativo a perteneciente a la administración de justicia, y que lo considerábamos un concepto mucho más amplio que lo jurisdiccional, y abarca otros actores institucionales: Corte Constitucional, juzgados de Paz, solución alternativa de conflictos, justicia indígena, etcétera. La

función es judicial, los órganos son jurisdiccionales, planteábamos en esas observaciones. En el caso, igual, que habla dc la Función Legislativa, cuyo órgano es en este caso, actualmente el Congreso Nacional para nosotros, no podemos confundir a la función con el órgano encargado de cumplir con la función. Yo pediria que además se considere que el término "judicial", para referirse a la justicia, es una denominación doctrinaria, política e histórica. Y en el fondo, al cambiar "judicial" por "jurisdiccional", se propone hacer algo más que un cambio semántico. En el tema de que la independencia de la justicia, de que las facultades son independientes, habiamos planteado la necesidad de incluir que la independencia sea externa e interna. Porque se debe consagrar la independencia no solo de los órganos de la Función Judicial, sino de sus jueces y magistrados. Eso se relaciona, porque se trata de diferenciar que existen dos clases de independencia judicial: la externa; es decir, de aquella con los otros poderes del Estado, externa, referida por ejemplo, al Legislativo, al Ejecutivo. Y la independencia interna, que es la que nos preocupa, que deberíamos establecerla, porque es aquella que se refiere a la independencia que debe haber entre magistrados de los diversos niveles y jurisdicciones. Por ejemplo, un congresista que ejerce presiones contra un juez para obtener una sentencia, viola esa independencia externa de la función. Mientras que el ministro de la Corte Suprema, que le llama al juez de primer nivel, en una provincia fronteriza, para presionar para que se dicte una sentencia en tal o cual orientación, viola el principio de independencia interna. En términos generales si habría posibilidades, yo insistiría en esos temas, señor Presidente, porque soy respetuoso de los espacios y porque creo que va a haber el tiempo para discutir con absoluta claridad, a profundidad y con absoluta transparencia, el tema de la situación actual de la justicia, yo no voy a responder, ni a los magistrados ni a las alusiones que se han hecho el día de hoy sobre

este tema, porque creo que este tema hay que tratarlo con absoluta responsabilidad, en función de lo que está entre manos, dar un mensaje al país, de que en esta Asamblea Constituyente no vamos a reeditar, bajo ninguna circunstancia, formas tradicionales, negativas, que han afectado a una justicia, que a veces por ser una justicia que no es pronta, no es eficaz, no tiene mecanismos claros para su ejecución, en términos de perfeccionamiento y mejoramiento interno, nos reservamos, señor Presidente, para intervenir en sobre este tema. -------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. El doctor Esteves tenía cinco minutos. Pero si los cede y podemos avanzar, le agradecería. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Seré breve, en vez que cinco, lo pongo en tres.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias por el descuento.----------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Creo, compañeros asambleistas, y hasta ustedes llega la exhortación. Yo he repetido aquí, que estoy contando en muchas cosas con ustedes, compañeros, porque llegué a la convicción de que estamos trabajando en una Constitución revolucionaria. Y no puede ser catalogada revolucionaria una Constitución, si esta Constitución pone precio a la justicia. La justicia tiene que ser absolutamente gratuita, compañero Presidente y compañeros asambleístas. Yo no acepto aquello de que los que no tienen plata no pagan, que los que tienen plata, sí pagan. Eso es absurdo, es discriminatorio, eso no puede contener una Constitución revolucionaria. La Constitución revolucionaria es la que permite al ser

humano, a la persona, tener acceso a la administración de justicia, sin tener que pagar dinero para acceder. Y es más terrible el caso, cuando el señor vicepresidente Cordero, nos da un cuadro estadistico, y nos dice, por ejemplo, y con esto termino, el dos mil cuatro, compañeros, el Estado puso ciento cuarenta millones para la Función Judicial, el ingreso de tasas judiciales fue de apenas cinco millones. El dos mil cinco, el Estado puso ciento cuarenta y un millones, y el ingreso de tasas fue de apenas cinco millones seiscientos mil. El dos mil siete, para abreviar, ciento cuarenta y ocho millones, seis millones de tasa judicial. La tasa judicial es ponerle precio a la justicia, no va a permitir que esta Constitución sea considerada como una Constitución revolucionaria, va a ser considerada como una Constitución que trata discriminadamente a los ciudadanos ecuatorianos. En fin y al cabo el pueblo somos todos, no podemos dividir a los ricos que paguen, y a los no ricos que no paguen, en relación a la administración de justicia. Por favor, los exhorto, aprobemos la gratuidad de la administración de justicia y punto, sin excepciones. De lo contrario, estaríamos actuando discriminatoriamente. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Andino. La réplica, por favor. Con usted concluimos ya, y procederemos a la votación. ----------

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Gracias, señor Presidente. Señoras y señores asambleistas: Consideramos que los aportes de esta noche han sido y serán sumamente valiosos, importantes y que, sin lugar a dudas, señor Presidente, recogen el sentir del pueblo ecuatoriano. Ante esta situación, brevemente permitanme, señor Presidente, referirme a algunos puntos que se han tratado en este debate definitivo. Nosotros hemos hablado de la Función Jurisdiccional, en el texto de los diez articulados, pretendiendo utilizar

ese término, de "Función Jurisdiccional". Pero, consideramos que es muy ambiguo y amplio. En consecuencia, consideramos que lo más procedente es utilizar un término común, cotidiano, más preciso y claro, con el que la ciudadanía, los hombres y las mujeres se han identificado en nuestro país, como es con el término de "Función Judicial". Por lo tanto, no vamos a utilizar el término "Función Jurisdiccional", sino "Función Judicial". Segundo. Se ha hablado de principios y características. Algunas observaciones ponen en duda la calidad de los principios procesales a los principios mencionados en los artículos sobre la naturaleza del sistema procesal y sobre la oralidad y cuestionan la pureza del sistema oral y la conveniencia del sistema acusatorio frente al sistema inquisitivo. Sobre el primer aspecto, tenemos un problema de definición básico. ¿Qué entendemos por principio procesal?, y ¿qué entendemos por característica del sistema procesal? En concordancia con la doctrina y literatura sobre la materia, la Mesa fue del criterio que esos artículos recogen verdaderamente principios que deben inspirar el sistema procesal, y no son simples características. Pues precisamente no son cualidades intrínsecas del sistema procesal, sino objetivos que deben realizarse y ser alcanzados. Se ha pedido que la administración de justicia sea gratuita. En verdad que este es un medio eficaz, verdadero, real para poder acceder a la justicia, para que definitivamente no quede nadie en este país, en estado de indefensión, para que muchos delitos o muchas acciones reñidas con la ley no queden en la impunidad. Ante esa realidad, señor Presidente, consideramos apropiado, necesario, que definitivamente la justicia debe ser gratuita, y es por ello que la ley establecerá el régimen de costas procesales. Paralelamente, al hablar de la unidad jurisdiccional, con el texto insertado en el artículo en referencia, no pretendemos reproducir la división tradicional de poderes, sino que se crean nuevas funciones, con objetivos y fines específicos. De acuerdo a

ello, conforme habiamos señalado en esta tarde, la Corte Constitucional, como primera función del Estado, y a ello se sumará también la Función Electoral, como un órgano especializado en administrar justicia en temas electorales; el Tribunal Contencioso Electoral. Señor Presidente y compañeros, considero que el debate ha sido arduo, ha sido positivo, ha sido muy amplio. Proponemos ciertos cambios, que a lo mejor ya está circulando el nuevo texto, a fin de que los compañeros y compañeras asambleístas conozcan, y de esa manera, definitivamente procedamos en esta misma noche a la votación y a su aprobación definitiva de los diez primeros artículos, de lo que son los principios de acceso a la justicia. Permítanme, finalmente, señor Presidente y compañeros y compañeras asambleístas, exhortarles, empezando por casa, de que la justicia debe nacer en casa, de que la diatriba, de que las acusaciones perversas y falsas deben quedar en el pasado. Actuemos honrada y decididamente, porque eso es lo que nos exige el pueblo ecuatoriano. La perversidad, las acciones negativas, esas deben ser cosas del pasado. El país exige cambios sensatos y correctos al mundo que estamos viviendo, esa gran revolución ciudadana y esos cambios de mentalidad. Hay que cambiar nosotros, para poder cambiar el país. Si no cambiamos, este país no cambiará jamás. Gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor asambleísta. Señor Secretario, sírvase leer el primer articulo. Discúlpeme, vamos a votar. Punto de conocimiento, le acepto. ----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Sí, señor Presidente. Yo soy miembro de la Mesa número Ocho, he venido trabajando cinco meses en la Mesa Ocho, y quiero preguntarles a los compañeros de Alianza País, ¿quién hizo estas correcciones?, ¿Por qué no nos llamaron a

nosotros también por lo menos para opinar sobre estas correcciones, señor Presidente?...----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Discúlpeme, hay un ponente...----------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Aquí está la compañera Catalina Ayala, aquí está la compañera Mae Montaño, el compañero César Gracia que también somos de la Mesa número Ocho, y que nos sentimos ofendidos por el hecho de ni siquiera haber sido consultados, señor Presidente. Gracias. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le acepto, señor. Señor Secretario, sírvase leer el articulado, uno por uno para ir votando. Que nos sirvan de escrutadores, el asambleísta Ávila y el asambleísta Guamangate, por favor. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Naturaleza, titularidad y ejercicio). La Justicia es el valor fundamental del Estado social y democrático de derecho y uno de los presupuestos éticos que garantiza la convivencia pacífica y armónica. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en esta Constitución". Hasta ahí el artículo uno. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Las personas que están de acuerdo, sírvanse pronunciar, por favor. Les pediría tomar asiento, por favor, compañeros. ¿Quién cuenta a la Mesa Directiva? ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo leído

tiene ciento dos votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Sírvase leer el siguiente artículo. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Articulo innumerado. (Independencia). Los órganos de la Función Judicial en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones son independientes. Cualquier violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la Ley". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sírvanse, señores escrutadores. Las personas que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. María Cristina también está levantando la mano.----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo leído, de Independencia, tiene ciento dos votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor. Sírvase leer el tercero. -------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Autonomía). La Función Judicial goza de autonomía administrativa, económica y financiera". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Las personas que están de acuerdo, sírvanse pronunciar. Cuente los votos, no se pase conversando con los vecinos, compañero. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información

entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo referente a la autonomía, tiene ciento dos votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Continuamos, por favor. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Unidad Jurisdiccional). Se establece la unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado, ni de las entidades del régimen seccional o autónomo podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por esta Constitución". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Las personas que están de acuerdo, que se sirvan pronunciar en ese sentido. Compañera De la Torre, le pediría, por favor, tomar asiento. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo referente a la unidad jurisdiccional, tiene noventa y nueve votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Siga la lectura.----

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo Innumerado. (Gratuidad). El acceso a la administración de justicia es gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Las personas que están de acuerdo, que se sirvan pronunciar en ese sentido. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, el artículo referente a la gratuidad, de la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, tiene ciento un votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Continuamos. -----

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Publicidad). Los juicios, en todas sus etapas, y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Las personas que están dc acuerdo, que se pronuncien al respecto. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información entregada por los asambleístas escrutadores, el artículo referente a la publicidad, tiene noventa y nueve votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente articulo. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Naturaleza del sistema procesal). El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de oralidad, simplificación, uniformidad, inmediación, eficacia, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. El retardo o negligencia en la administración de justicia, imputable al juez, magistrado u otros funcionarios, serán sancionados de conformidad con la ley". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Los que están de acuerdo que se sirvan pronunciar. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de conformidad con la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo referente a la naturaleza del sistema procesal, tiene noventa y cinco votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Continuamos. -----

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Oralidad). La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción, inmediación y dispositivo". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Se vota ese artículo. Las personas que están de acuerdo, que se pronuncien. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo referente a la oralidad, tiene noventa y siete votos a favor. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Continuamos con el siguiente. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Criterios de Designación). Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Las personas que están de acuerdo, que se sirvan pronunciar. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo referente a criterios de designación, tiene noventa y cinco votos a favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Sírvase leer el último artículo. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. "Artículo innumerado. (Carrera judicial). Se reconoce y garantiza la carrera judicial en la justicia ordinaria, cuyas regulaciones se determinarán en la Ley. La profesionalización con base en la formación continua, así como la evaluación periódica de los funcionarios son condiciones indispensables para la promoción y permanencia en la carrera judicial". ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Los que están de acuerdo con el último artículo que se sirvan levantar la mano. ----------
EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la información entregada por los señores asambleístas escrutadores, el artículo referente a la carrera judicial, tiene noventa y siete votos a favor. -------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Han sido aprobados los diez artículos para la Constitución. Les quedo muy agradecido. Compañeras y compañeros asambleístas, vamos a suspender la sesión este rato. Tenemos el número suficiente para seguir discutiendo, pero creo que es un tema que amerita un espacio mayor para el debate, es un tema muy importante. Así que vamos a suspender la sesión y continuaremos oportunamente con el Mandato que tiene que

ver con la utilización de los fondos del Fondo de Solidaridad, de los recursos del Fondo de Solidaridad. Mañana continuamos, a las tres de la tarde tenemos Pleno, y continuamos con la discusión de la Mesa Seis de los temas de Trabajo, y pasaremos a la votación, espero. Gracias y hasta mañana. ----------

VI

El Señor Presidente clausura la sesión a las veinte horas cuarenta y siete minutos.----------

ALBERTO ACOSTA ESPINOZA
Presidente de la Asamblea Constituyente

FRANCISCO VERGARA ORTIZ
Secretario de la Asamblea Constituyente

FRS/